

**De ‘refugio de paz’ a la pesadilla de la guerra:  
implicaciones del conflicto armado en el proceso organizativo  
de ‘comunidades negras’ del Pacífico nariñense<sup>1</sup>**  
(borrador 05/2005)

Eduardo Restrepo<sup>2</sup>

### Introducción

En la madrugada del pasado primero de febrero, más de un centenar de guerrilleros del Frente 29 de las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) y de la Columna Comuneros del Sur del ELN (Ejército de Liberación Nacional) redujeron a cenizas el puesto fluvial de la infantería de marina en el poblado de Iscuandé. Con ráfagas de fusil atacaron el puesto donde estaban 58 militares, hiriendo a 25 y resultando muertos 16 de ellos (un oficial, nueve infantes regulares y seis soldados campesinos) (Semana 2005/05/03). Este ataque es el de mayor envergadura desplegado por la guerrilla en lo que va corrido de la administración del presidente Álvaro Uribe y, para algunos analistas, podría indicar un punto de quiebre de lo que han considerado un ‘repliegue estratégico’ de las FARC frente a la política de ‘seguridad’ implementada por este gobierno basado en el reclutamiento de ‘soldados campesinos’ y en la recuperación militar del territorio nacional (El Tiempo 2005/03/02). Para el gobierno, sin embargo, lo sucedido en Iscuandé no es más la expresión de los errores militares (incluyendo la infiltración de guerrilleros de las FARC) y falta de disciplina puntuales de los uniformados (El Espectador 2005/03/02, Semana 2005/05/03).

En el contexto del Pacífico nariñense<sup>3</sup>, este es otro hecho que evidencia la escalada del conflicto entre diferentes actores armados imbricados de disímiles formas con la producción y comercialización de narcóticos, se empezaron a disputar a sangre y fuego uno a uno los ríos, playas, poblados y bosques de toda la región. Todo esto ha ocurrido con una celeridad inusitada,

L

<sup>1</sup> Informe realizado para el Instituto Colombiano de Antropología e Historia. Agradezco el apoyo dado para esta investigación por Mauricio Pardo y María Victoria Uribe así como los valiosos comentarios realizados por Carlos Efrén Agudelo.

<sup>2</sup> Universidad de Carolina del Norte-Chapel Hill.

<sup>3</sup> Por Pacífico nariñense o Pacífico sur se entiende aquí las tierras bajas y el piedemonte de la Cordillera Occidental, conformada por los municipios de de Tumaco, Francisco Pizarro, Mosquera, Olaya Herrera, La Tola, El Charco, Santabábara (ubicados en la zona costera) y Barbacoas, Roberto Payán, Magüí Payán (zona centro- piedemonte). El Pacífico nariñense tiene una extensión de 17.299 km., lo que corresponde al 52% del Departamento de Nariño.

transformando radicalmente la región del Pacífico sur en unos cuantos años e impactando de múltiples maneras a los pobladores locales y sus dinámicas organizativas.

El proceso organizativo de comunidades negras<sup>4</sup> en la región del Pacífico sur había logrado, en menos de una década, el reconocimiento de sus derechos de propiedad colectiva sobre gran parte de lo que hasta entonces aparecían a los ojos del estado colombiano como tierras baldías, insertando la identidad cultural y las organizaciones étnico-culturales como referentes desde los cuales se pensaba la región y se empezaron a definir las subjetividades de muchos de sus pobladores. Todo parecía indicar que el empoderamiento de las organizaciones de carácter étnico apuntaba a consolidar una nueva modalidad de ordenamiento territorial y de interlocutor en lo local y regional.

A diferencia de casi la totalidad del territorio colombiano, el Pacífico se había mantenido al margen de la escalada militar, de la economía del terror y de la violencia como mecanismo privilegiado de resolución de conflictos. No era gratuito, por tanto, que el Pacífico fuera considerado por aquel entonces como un verdadero un ‘remanso de paz’ (Arocha 1993). Desde el río Atrato, en el extremo norte, hasta Tumaco en la frontera con el Ecuador, el Pacífico colombiano es hoy un febril escenario de guerra. En términos generales, las dinámicas de la disputa militar por el control sobre la región se han intensificado afectando sustantivamente las condiciones en las cuales se desarrollaba la vida de las poblaciones locales y desde las cuales se habían articulado el movimiento organizativo de reivindicación cultural y territorial. De ahí que la región ha pasado en unos cuantos años del ‘remanso de paz’ a la pesadilla de la guerra.

Este documento busca examinar los diferentes impactos del conflicto armado en el proceso organizativo de ‘comunidades negras’ para la región del Pacífico nariñense. En la primera sección se describirá la trayectoria de este proceso y de cómo se perfilaba cuando irrumpió el conflicto armado en la región. En la segunda sección se identificarán los factores e interpretaciones que lo explican. En la tercera parte, se analizarán propiamente los efectos de este conflicto en tres escalas del proceso organizativo de comunidades negras (los líderes, las organizaciones y el proyecto) así como la dimensión espacial del mismo a partir del concepto de ‘geografías del terror’. Cierra el documento con unas reflexiones donde se elaboran algunos de los aspectos que contribuyen a la especificidad del despliegue del conflicto en el Pacífico nariñense y de sus impactos en el proceso organizativo.

## 1. La ‘revolución étnica’

En una entrevista publicada en la revista *Semana*, el antropólogo chocoano Jhon Antón Sánchez argumentaba que el conflicto armado debía examinarse como una estrategia de ‘contra-revolución étnica’ para la región del Pacífico en general y para el Chocó en particular. Desde esta perspectiva, el conflicto armado en el Pacífico colombiano constituye una ‘contra-revolución’ en la medida en que amenazaba directamente un proceso *sui generis* de reivindicación territorial por parte de los movimientos sociales de carácter étnico:

“En ninguna parte de América Latina se había demostrado con tanta contundencia, y en tan corto tiempo, que los movimientos sociales étnicos lográramos reivindicar nuestros derechos territoriales. En menos de cinco años, en el Chocó hemos titulado más de

L

<sup>4</sup> Por proceso organizativo de comunidades negras se entiende las dinámicas organizativas ligadas al reconocimiento de los derechos territoriales, económicos y culturales de las comunidades negras como un grupo étnico. Para mayor detalle véase, Pardo (2001) y Wade (2002).

3'500.000 hectáreas a favor de las comunidades afrocolombianas, un hecho sin precedentes en el mundo. Y el conflicto armado amenaza directamente este proceso” (Antón 2003).

Bien puede caracterizarse como de ‘revolución étnica’ lo que sucedió durante los noventa en el Pacífico colombiano. Una ‘revolución’ en el sentido de una transformación radical de las condiciones desde las cuales se articulaban los diferentes sujetos políticos. Una ‘revolución’ en términos de un cambio sustancial de las modalidades jurídicas desde las que se definían los derechos de propiedad sobre bastas áreas de la región. Finalmente, una ‘revolución’ en cuanto a la economía de visibilidades y las subjetividades puestas en juego con los referentes de la identidad cultural y étnica. No obstante, una ‘revolución’ pacífica y dentro de los límites de la institucionalidad. Una ‘revolución’ que involucraba transformaciones radicales, sin duda; pero unas que operaban por fuera de las lógicas de la guerra, apostándole a las tendencias hacia la democratización que se perfilaba en el país de los noventa.

Dado que la noción de revolución ha sido ligada a ‘toma del poder’ y transformaron social radical mediante la violencia (Laclau 1996: 114), otros autores han recurrido al concepto de ‘reforma’ para caracterizar este proceso. En este sentido, el historiador Oscar Almario, define este proceso como una colosal ‘reforma’ agraria, étnica y social:

“En poco más de una década, entre 1991 y el 2002, los afrocolombianos o afrodescendientes llevaron a cabo una tarea social de dimensiones colosales y de la cual no es plenamente consciente el país nacional, incluida la academia y, por extensión, tampoco la comunidad internacional. Dicha tarea se puede resumir en que se trata de una portentosa ‘reforma agraria, étnica y social’ en el Pacífico, en la medida que se legitimó con la Ley 70 de 1993 su control sobre los territorios ancestrales, lo que al tiempo entraña un profundo sentido de ingeniería e imaginación social para construir un territorio propio, que sirve de soporte simbólico y material a su identidad étnica resignificada [...] [H]ay que ser plenamente conscientes también de que este impresionante esfuerzo social se ha llevado a cabo, justamente, durante la década más violenta de la historia de Colombia, sin que fuera necesario recurrir a ella por parte de la gente negra e indígena, porque si por algo se caracterizan ambos procesos es por su dignidad y condición pacífica [...]” (Almario 2004: 99).

Más allá de si se habla de ‘revolución étnica’ o ‘reforma agraria, étnica y social’, ambos autores confluyen en la caracterización de las monumentales transformaciones adelantadas durante la década de los noventa en la región del Pacífico colombiano.<sup>5</sup>

En esta ‘revolución o reforma étnica’ se pueden identificar analíticamente diferentes fases en el Pacífico nariñense. La primera fase empieza con la difusión del Artículo Transitorio 55 (AT 55) de la Constitución Política de 1991.<sup>6</sup> Es a propósito de este AT 55 que en el Pacífico sur se empieza a articular local y regionalmente un discurso y una estrategia organizativa en torno a los derechos étnicos de las ‘comunidades negras’. Este discurso y estrategia organizativa apelaba a la existencia de una especificidad étnica de las ‘comunidades negras’ expresada en la estrecha interacción entre territorio, identidad y cultura. Antes del AT 55 en el Pacífico sur se

L

<sup>5</sup> Al respecto, véase el análisis elaborado por Carlos Rosero (2002).

<sup>6</sup> El AT 55 definía los términos para constituir una comisión integrada por representantes de las organizaciones de comunidades negras, funcionarios de las instituciones relevantes del estado y ciertas políticas y expertos. Esta comisión estaría a cargo de proponer el texto de ley que reconocería ciertos derechos colectivos sobre tierras habitadas por las comunidades negras en la región del Pacífico colombiano, así como otra serie de derechos culturales y económicos como grupo étnico.

establecieron diversas organizaciones y movimientos (luchas cívicas, campesinas, estudiantiles, gremiales, sindicales, contra la discriminación racial, etc.), pero ninguno de ellos había sido articulado desde la apelación a unas ‘comunidades negras’ que constituían un grupo étnico y, como tal, el Estado colombiano debía reconocerles unos derechos territoriales, culturales y económicos de acuerdo con la por aquel entonces recién sancionada Constitución Política.

Para el Pacífico sur, la constitución de muchas organizaciones étnicas o perfilar como tales algunas de las existentes estuvo asociada con la definición de los representantes requeridos para la Comisión Especial y la Consultiva Departamental que se encargarían de redactar la propuesta del texto de ley que reglamentaba el AT 55. En este proceso ocuparon un lugar destacado los religiosos pertenecientes al Vicariato de Tumaco, pero también se recibió el apoyo de recursos financieros y funcionarios provenientes de proyectos de cooperación internacional (Proyecto Guandal), de ONGs (Plan Padrinos), e instituciones del estado (CVC y Corponariño). Organizaciones de otras partes del Pacífico o del país también hicieron presencia desde este primer momento: Movimiento Nacional Cimarrón, Obapo (Organización de Barrios Populares de Quibdó) y CNCN (Coordinadora Nacional de Comunidades Negras).

Cientos fueron los talleres, reuniones, asambleas y eventos adelantados para la difusión del AT 55 en muchos de los ríos, esteros y playas del Pacífico sur, así como para la elaboración del texto de ley que reglamentaba el AT 55. Para los ahora conocidos como los ‘líderes históricos’<sup>7</sup> del proceso organizativo y político de las ‘comunidades negras’ de la región, fue precisamente en aquel momento donde tuvieron noticia y empezaron a pensar en términos políticos sobre lo organizativo y sobre sí mismos desde la ‘perspectiva étnica’.<sup>8</sup> Durante esta fase, se consolidó una dinámica de estrecha interacción entre lo nacional (Comisión Especial para las Comunidades Negras), lo regional (Comisión Consultiva Departamental de Nariño) y lo local (organizaciones en los diferentes ríos, playas, esteros y poblados del Pacífico nariñense). Los representantes locales, regionales y nacionales se encontraron repetidamente discutiendo y pensando los contenidos y alcances del texto de ley que se estaba definiendo en la Comisión Especial. De ahí que fue un proceso acelerado de formación política y de constitución colectividad. Debido a este monumental esfuerzo pedagógico en el cual se perfilan las primeras organizaciones étnicas y sus líderes poniendo en circulación en diferentes planos este discurso de la ‘perspectiva étnica’, esta primera fase bien puede denominarse como la de la ‘pedagogía de la alteridad’.

El comienzo de la segunda fase se puede identificar entre agosto de 1993 y marzo de 1994 con la sanción de la Ley 70, la Tercera Asamblea Nacional de Comunidades Negras y la constitución del Palenque Territorio Región de Nariño. La sanción de la Ley 70 de 1993 marca el fin de las dinámicas de trabajo desprendidas de la Comisión Especial, para pasar a una estrategia de reglamentación de la Ley y de consolidación de las organizaciones con relación a sus bases y al

L

<sup>7</sup> Más adelante volveré sobre esta distinción entre ‘líderes históricos’ y los recientes.

<sup>8</sup> Esta ‘perspectiva étnica’ supone, entonces, un inusitado sujeto político para la región que argumenta en términos de etnicidad, diferencia cultural, identidad, territorialidad, colectividad y tradición. En vez de la titulación individual sobre parcelas de ‘tierra’ que proponían las organizaciones campesinas, desde las organizaciones étnicas se buscaba la titulación colectiva sobre el ‘territorio’ (que no es lo mismo que ‘tierras’). Antes que la asistencia técnica de los ‘expertos’ (agrónomos, ingenieros, etc.), capacitación y créditos para incrementar una producción orientada al mercado que esgrimían organizaciones gremiales, las organizaciones étnicas pretendían reforzar las ‘prácticas tradicionales de producción’ con la consulta a los ‘mayores’ de la ‘comunidad’ como expresión de la tradición cultural y garantes de la conservación del ‘territorio’. En contraste con el proyecto de integración a la modernidad y al estado nación en contra de la discriminación racial agenciado por ciertos sectores políticos y organizaciones afrocolombianas, las organizaciones étnicas introducen el énfasis del derecho a la diferencia cultural y el empoderamiento de su sujeto político como condición de equidad-en-la-diferencia.

entramado institucional en el cual debían operar. Dentro de la reglamentación de la Ley 70 se priorizó el Capítulo III, referido a la titulación colectiva. El proceso de reglamentación de este Capítulo concentró gran parte de los esfuerzos de los líderes y muchas de las acciones y recursos institucionales ya que demandaba no sólo la definición de un decreto que definiera las condiciones y pasos para la titulación colectiva (el que apareció en 1995 como el 1745), sino que se definieron espacios mixtos entre instituciones del gobierno involucradas en el proceso y las organizaciones conocidos como los Comités Regionales donde se planificaba el flujo de los recursos y las prioridades para obtener la titulación colectiva.

La Tercera Asamblea Nacional de Comunidades Negras se celebró en Puerto Tejada, recién sancionada la Ley 70. En esta asamblea nace oficialmente el Proceso de Comunidades Negras (PCN) como una red de organizaciones que se identificaban en torno a una serie de principios<sup>9</sup> y a unos mecanismos de definición de su agenda, de coordinación de actividades y de representación (Grueso 1993-1994, Rosero y Grueso 1994). Es en esta Asamblea donde algunas organizaciones del Chocó, como la Obapo y la Acia, deciden priorizar el trabajo entre sus bases y en lo local, por lo cual no participan de la red de carácter nacional que daba origen al PCN.

En mayo de 1994 se constituye, en la asamblea departamental realizada en Bocas de Satinga, el Palenque Territorio Región de Nariño. En esta asamblea se realizó un balance de lo desarrollado hasta ese momento y se definen los principios y estructura organizativa dentro de los parámetros y estrategia organizativa del PCN. En esta misma asamblea en Bocas de Satinga se reconoce una estructura de coordinación regional basada en las tres zonas que habían venido operando a saber: 1) zona norte, que incluye las organizaciones de los municipios de la Tola, El Charco, Olaya Herrera, Iscuandé y Mosquera, con sede en Bocas de Satinga. 2) zona centro, que comprende los municipios de Barbacoas, Magui Payán y Roberto Payán, con sede en Barbacoas. 3) zona sur, conformada por las organizaciones de los municipios de Tumaco y Francisco Pizarro, con sede en Tumaco.

Las organizaciones y activistas entendieron la Ley 70 como un triunfo suyo a pesar del deseo del gobierno por menoscabar sus alcances. De ahí, que esta ley se constituyera como la herramienta privilegiada a través de la cual se debían establecer las demandas y confrontaciones al gobierno y, a través del mismo, a otros actores regionales o locales en aras de materializar los derechos de la comunidad negra como grupo étnico. Esta estrategia combinada con la instrumentalización de de Palenque como estructura regional, condujo a un posicionamiento de las organizaciones y sus representantes en diferentes esferas. En primer lugar, permitió abordar concertaciones con impactos en la región en su conjunto o en áreas específicas con programas y proyectos promovidos por instancias gubernamentales, por convenios de cooperación técnica internacional o por ONGs. Igualmente, como aplicación de articulados de la Ley o de decretos y otras leyes asociadas, los representantes de las organizaciones negras empezaron a ser parte de las esferas directivas de ciertas entidades gubernamentales como la Corponariño. Finalmente, perfiló su participación en el espacio mixto de los Comités Regionales donde se diseñaron las agendas,

<sup>9</sup> En un documento dirigido a la presentación del PCN ante las ONGs, aparecen los siguientes principios: "1) La reafirmación de la identidad cultural de las Comunidades Negras. 2) La defensa del territorio ancestral de las Comunidades Negras y del uso sostenible de los recursos naturales. 3) La participación autónoma de las Comunidades Negras y sus organizaciones en el proceso de toma de decisiones que las afecten. 4) La defensa de una opción de desarrollo acorde con las aspiraciones culturales de las Comunidades Negras, y cultural y ambientalmente sostenible. 5) Aportar desde las particularidades a la lucha de las Comunidades Negras y demás sectores por la reivindicación de sus derechos y por la construcción de un mundo más justo" (Rosero y Grueso 1994: 2). Para mayor detalle, véase Grueso, Rosero y Escobar (1995).

ritmos y criterios del proceso de titulación colectiva en la región. Dos de las consecuencias de este posicionamiento de las organizaciones y representantes en estas esferas fueron: de un lado, la creación de los concejos comunitarios y el cumplimiento de otros requisitos para la titulación colectiva; y, del otro lado, la aparición de una serie de roces y contradicciones con actores locales, entre los que cabe destacar los empresarios dedicados a la extracción de los recursos naturales o a la agroindustria.

Desde la aparición del decreto 1745 de 1995 que, al reglamentar el Capítulo III de la Ley 70, definió las características y requerimientos para la constitución de los consejos comunitarios y otras disposiciones tendientes a la titulación colectiva, en Nariño se empezaron a aparecer los diferentes consejos comunitarios, en su gran mayoría, bajo la tutoría de la entidad coordinadora regional del Palenque y de las organizaciones étnico-territoriales. Este proceso implicó la intensificación y extensión del trabajo de las organizaciones y sus representantes con las poblaciones locales (en muchas ocasiones con la asesoría de funcionarios de proyectos, programas o instituciones estatales, pero en general adelantada con los recursos destinados para ello). Los censos y talleres se multiplicaron en aras de levantar la información requerida, así como las asambleas y reuniones se intensificaron para el establecimiento de los consejos comunitarios.

Ante el posicionamiento de las organizaciones y sus representantes en las esferas anteriormente descritas para materializar los derechos étnicos de las comunidades negras, ciertos políticos y empresarios que venían operando en la región empiezan a percibirles contrarios a sus propios intereses. Los roces se dieron primero y más directamente con los empresarios dedicados a la extracción de recursos naturales no renovables debido a las claras disposiciones contenidas en la Ley que entraban a limitar los permisos de extracción y, en ciertos casos, suspenderlos en tierras susceptibles de titulación colectiva.<sup>10</sup> Aunque los empresarios lograron continuar con la extracción,<sup>11</sup> desde entonces asumieron que los líderes de las organizaciones eran los responsables de las trabas, llegando en algunos casos a intimidarlos. Con los recursos no renovables, concretamente con las retroexcavadoras utilizadas para la extracción del oro en los lechos de los ríos, también se presentaron tensiones, algunas de las cuales desembocaron en confrontaciones abiertas como el caso expulsión de unas retroexcavadoras que empezaban a operar en el río Tapaje por parte de Organichar. En otras partes como Barbacoas, sin embargo, la capacidad de movilización de las organizaciones y la fuerza de los mineros, no se tradujeron en acciones como esta. Los empresarios de la palma y la camaricultura concentrados en el área de Tumaco pronto también empezaron a operar dentro de la misma lógica de pensar a los líderes de las organizaciones como una traba para sus intereses mediatos y futuros. Esta vez se añadía la contradicción entre el modelo de desarrollo que encarnaban los cultivos industriales de palma y camarón y el proyecto territorial y político que agenciaban las organizaciones de comunidades negras basadas en la nueva institucionalidad estatal favorables al discurso multicultural y ambiental.

L

<sup>10</sup> Las organizaciones demandaron y lograron un acuerdo por escrito para que Corponariño cumpliera las disposiciones contenidas en la Ley 70 y en la Ley 99 de 1993, en la primera acción desplegada por el Palenque solo días después de su constitución en Bocas de Satinga, el 24 de mayo, con el director de la Corponariño, Mauricio Gavilanes.

<sup>11</sup> Amparando con 'permisos legales' madera o palmito proveniente de otros lugares (como siempre lo han hecho) dada la negligencia o corrupción de los funcionarios de Corponariño o mediante la creación de organizaciones étnicas que los favorecieran como fue el caso de Alenpac (una empresa de enlatado de palmito de naidí) que organizó el consejo comunitario en Bocas de Saquihondita y en El Progreso, Patia, al igual que creó una nueva organización Onri (Organización de negritudes del río Iscuandé).

En síntesis, esta segunda fase se caracteriza por cuatro aspectos que, interrelacionados, constituyen un inusitado empoderamiento del nuevo sujeto político y de derecho de las 'comunidades negras': 1) la consolidación de las organizaciones en cuanto a la instrumentalización de estructura regional representada en el Palenque; 2) el posicionamiento de sus representantes como interlocutores legítimos con respecto a las instituciones, programas y proyectos ejecutados en la región; 3) la creación de los consejos comunitarios en el contexto del avance de la titulación colectiva; y 4) la aparición de una serie de contradicciones con actores locales, especialmente con los empresarios dedicados a la extracción de recursos naturales o a la agroindustria.

El inicio de la última fase se ubica entre 1997 con la disolución de Palenque como estructura organizativa regional y el 2000 con la irrupción del conflicto armado en la región. Esta sería la fase donde, en palabras de John Antón Sánchez, se localizaría la 'contra-revolución étnica'. La desaparición del Palenque como estructura organizativa regional es independiente y antecede a la irrupción del conflicto, pero una vez este aparece tiene grandes efectos sobre las dinámicas del movimiento organizativo que serán analizadas en la tercera parte del presente documento.

Para el 12 y 13 de diciembre 1999 se consolidó la fractura de la estructura organizativa de carácter regional del Palenque. Esta fractura consistió en la creación de una Asociación (ASOCOETNAR) reuniendo las organizaciones y consejos comunitarios de las zonas norte y centro, dejando a Palenque como una entidad organizativa sólo para la zona sur. Esta Asociación surge a partir de una vieja tensión, que se había agudizado en los dos últimos años, sobre la representación entre los líderes de estas organizaciones y consejos comunitarios con ciertos líderes de las organizaciones del sur, especialmente con quienes se encontraban en Tumaco. Desde la perspectiva de los miembros de la Asociación, estos líderes en Tumaco habían concentrado sobre sí las relaciones con las instituciones, proyectos y programas en nombre de la región en su conjunto, tomando decisiones y accediendo a información y recursos que no circulaban fácilmente. La Asociación buscaba, entonces, permitir una interlocución más directa y más local entre las organizaciones y consejos comunitarios con quienes intervenían en sus zonas. Algunos, incluso, leían esta tensión como una entre organizaciones y consejos comunitarios 'rurales' y sus dirigentes 'campesinos' del Pacífico sur, frente a la intención hegemónica y protagónica de los líderes 'urbanos' de Tumaco sin anclajes en organizaciones étnico-territoriales o consejos comunitarios. Para algunos de estos últimos, sin embargo, la tensión radicaba más en una subordinación de ciertos miembros de la recién constituida Asociación para evitar las mediaciones de una estructura regional como Palenque en aras de capitalizar política y económicamente relaciones más mediatas, lo que en últimas implicaba poner en riesgos el proyecto de las comunidades negras en su conjunto.

Esta fractura en el plano regional, no significó una distancia inmediata con respecto al PCN como proyecto político y red de organizaciones en lo nacional. Como se evidencia en uno de sus documentos, la Asociación seguía perteneciendo, orgánica e ideológicamente, al PCN: "En la actualidad esta estructura organizativa se encuentra dividida en dos, una que conservó el nombre de Palenque y comprende los municipios de Tumaco y Francisco Pizarro y la otra que se llama Asociación de la Zona Norte y Centro recogiendo los ocho municipios restantes. Pero a pesar de esta división se mantienen los mismos principios y objetivos" (PCN 2001: 5). Unos años después, en 2002, en la zona sur que había quedado a cargo del Palenque se establece una nueva ruptura, diluyéndose definitivamente esta entidad y surgiendo una Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur (RECONPAS), la cual sí se ha distanciado orgánicamente del PCN. A finales de los noventa, Cordeagropaz, con la participación de Corpoica, adelantó una alianza entre los Consejos Comunitarios para ampliar los cultivos de palma africana con la propuesta de que la comunidad pone la tierra y ellos el dinero, el cual ha sido obtenido, entre otros, de fondos provenientes del

Plan Colombia. Es en el contexto de esta alianza en la que surge la Red de Consejos Comunitarios del Pacífico Sur.

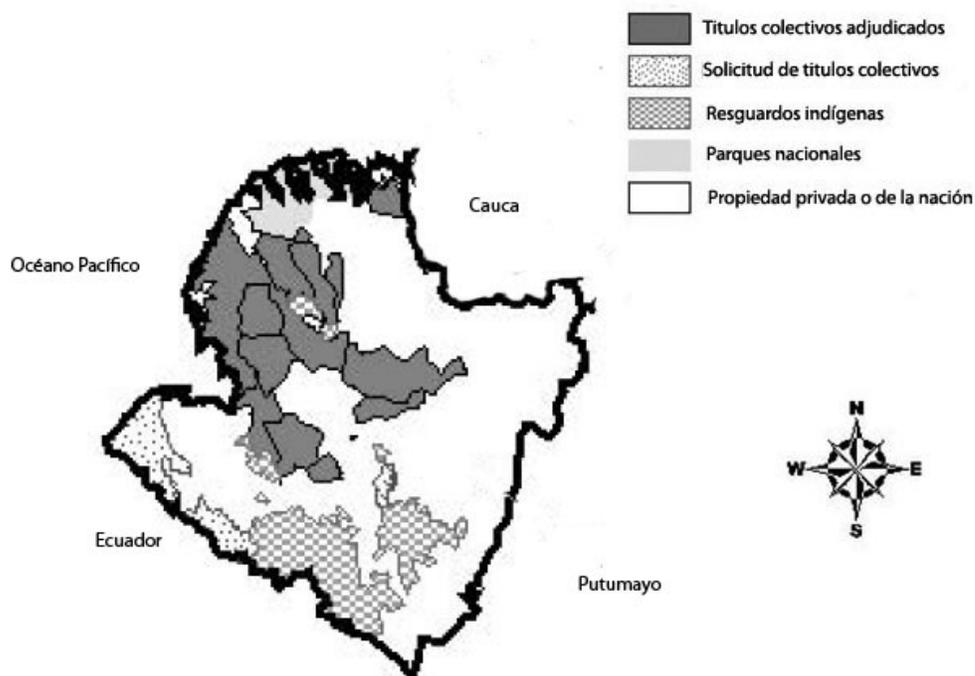
Así, en contraste con la fase inmediatamente anterior, el resultado de la disolución de Palenque como estructura regional ha sido la tendencia a que los recién constituidos consejos comunitarios de los ríos adquieran mayor relevancia en las concertaciones e interacciones con entidades y programas gubernamentales y no gubernamentales así como con los otros actores que hacen presencia en lo local. Otra característica de esta fase, es que la obtención de los títulos colectivos es un proceso ya avanzado (véase mapa y tabla) por lo que las prioridades que se insertan en la agenda giraban hacia el ejercicio territorial concreto, esto es, hacia cómo articular proyectos productivos locales y en los planes de vida con base en los títulos colectivos adquiridos. No obstante, es precisamente en este giro donde irrumpe el conflicto armado asociado a una transformación radical de la economía regional cambiando gran parte de los supuestos sobre los cuales se había articulado el proceso organizativo de comunidades negras en la región. Estos cambios son precisamente lo que examinaremos en los siguientes apartes.

### Títulos expedidos por el Incora a los consejos comunitarios de Nariño 1996-2003

Nº	Título Colectivo Concejo Comunitario	Área Hectáreas - M2	Municipio	Veredas	Familias	Personas	Resolución Nº	Fecha
1	Unicosta	16,063.0000	Santa Bárbara	10	245	1352	0158	9-Feb-98
2	El Progreso	29,969.3750	Roberto Payán	9	314	1612	1178	12-May-98
3	Unión Patía Viejo	41,197.0000	Magüí Payán y Roberto Payán	18	636	3502	04915	29-Dec-98
4	Veredas Unidas	13,170.0000	Tumaco	3	229	1322	2534	24-Nov-99
5	El Progreso del Campo	9,174.5426	La Tola	22	125	741	1124	23-May-00
6	Manos Amigas del Patía Grande	66,562.0000	Magui Payán	13	395	2417	1130	23-May-00
7	Agricultores del Patía Grande	31,467.4000	Roberto Payán	5	202	1221	1123	23-May-00
8	ACAPA	94,388.4425	Mosquera, Tumaco, Fco Pizarro	32	1453	8106	1119	22-May-00
9	Sanquianga	33,429.0614	Olaya Herrera	24	684	3501	02773	21-Nov-00
10	La Amistad	17,655.0000	Maguín Payán	2	86	491	02800	22-Nov-00
11	Satinga	24,507.0400	Olaya Herrera	20	672	4026	03292	18-Dec-00
12	Manos Unidas del Socorro	9,664.2407	Barbacoas	10	180	1263	02697	21-Dec-01
13	Unión de Cuencas de Isagualpi	34,268.0037	Roberto Payán	20	655	3372	02699	21-Dec-01
14	Integración de Telembi	15,330.7296	Roberto Payán	9	466	2481	00491	10-Apr-02
15	Río Tablon Salado	3,114.8997	Tumaco	4	140	725	002539	23-Dec-02
16	La Nupa del Río Caunapí	183.6000	Tumaco	1	87	371	002545	23-Dec-02
17	Union Río Rosario	10,617.9201	Tumaco	13	482	2289	002539	23-Dec-02
18	Río Gualajo	2,774.6834	Tumaco	4	147	786	002538	23-Dec-02
19	Unión del Río Chagüí	27214.6891	Tumaco	24	1308	7478	002201	3-Dec-02
20	Catangueros	21064.9273	Roberto Payán	8	212	1074	002202	3-Dec-02
21	La Esperanza del Río La Tola	3,616.0820	La Tola	2	125	660	002537	23-Dec-02
22	Imbilpi del Carmen	2,783.3182	Tumaco	1	71	509	002544	23-Dec-02
23	El Progreso del Río Nerete	10,351.3516	La Tola	2	125	737	000404	28-Apr-03
24	Río Mejicano	13,462.8056	Tumaco	5	286	1649	000400	28-Apr-03
25	Gualmar	5,787.7310	Olaya Herrera	4	156	915	000399	28-Apr-03
26	Cordillera Occidental de Nariño COPDICONC	136,265.3152	Policarpa y Santa Barbara de Iscuandé	35	488	2648	000402	28-Apr-03
27	Bajo Mira y Frontera	46,481.9407	Tumaco	42	1240	6271	046	21-Jul-03
	<b>Total</b>	720,565.0994		342	11,209	61,519		

Fuente: Incora. Regional Nariño-Putumayo

## Estado de la titulación colectiva de comunidades negras en el departamento de Nariño para el 2002



Fuente: Karl H. Offen (2003: 45)

## 2. De 'refugio de paz' a la pesadilla de la guerra

El 19 de septiembre de 2001 en horas de la tarde, a pocos metros de la entrada de la Iglesia de San Andrés de Tumaco, un sicario disparó a quemarropa ocho veces contra la hermana Yolanda Cerón. Minutos después, moría la religiosa en el hospital. Hacía exactamente un año que los paramilitares habían anunciado su llegada a la ciudad de Tumaco, en el Pacífico sur. No era la primera persona que asesinaban en aras de imponerse,<sup>12</sup> pero con el asesinato de la hermana

L

<sup>12</sup> La autoría del asesinato no se encuentra en duda. En una reciente noticia sobre el arresto de miembros del grupo de paramilitares, según la policía colombiana, "[...] la hermana de Yolanda Cerón Delgado [...] fue ultimada por cinco personas al mando de alias 'Sarmiento' o alias 'Pacho', jefe de las autodefensas ilegales de Tumaco" (Diario de Occidente 06/12/2004). Igualmente, en un artículo anterior de el periódico El Tiempo se anotaba: "Para las autoridades de la región, haber denunciado este tipo de situaciones fue la causa por la que el pasado 19 de septiembre fue asesinada la religiosa Yolanda Cerón, directora de la Pastoral Social de la Diócesis de Tumaco" (2001/08/10).

Yolanda se marcó un hito en el imaginario colectivo y un punto de quiebre en el movimiento organizativo.<sup>13</sup>

La llegada de los paramilitares se asocia a la disputa militar de la región a la guerrilla de las FARC y el ELN. Desde los años noventa se sabía de la presencia esporádica e intermitente del Frente 29 de las FARC, entre los municipios de Barbacoas, Magui Payán y Barbacoas. Por su parte, la Columna Comuneros del Sur del ELN se movían entre los municipios de Ricaute, Roberto Payán y Barbacoas.

La aparición de los paramilitares en Tumaco y las zonas aledañas arrancó en la segunda mitad de 2000 con la incursión de un grupo de 400 hombres, denominado Bloque Libertadores del Sur, comandado por Guillermo Pérez Alzate, conocido como 'Pablo Sevillano' (El País/13/05/2002, Semana 2003). La tecnología de intervención de los paramilitares en la región fue análoga a la desplegada en otros lugares. Después del trabajo de 'inteligencia' y de instalación, generalmente con el apoyo de personas de la región,<sup>14</sup> se despliegan las primeras acciones concretas. En aras de ganar cierta legitimidad sobre determinados sectores desde el discurso del 'orden' y la 'seguridad', inicialmente se instrumentaliza una 'limpieza social' en la cual son eliminados indigentes, atracadores callejeros, consumidores de drogas y pandillas juveniles.<sup>15</sup> Paralelamente, se golpea a los líderes de los sectores organizados o a sectores de la población que efectiva o imaginariamente, actual o potencialmente, constituyan una traba para la consolidación de su dominio. En nombre de la narrativa de "auxiliadores de la guerrilla" se despliegan una serie de amenazas y asesinatos selectivos de estos líderes o masacres en las pobladores locales desde la lógica de la economía del terror cuyo efecto es la parálisis y el silencio de quienes pueden quedarse y el desplazamiento de quienes se ven forzados a huir para salvar sus vidas: "A punta de masacres, asesinatos selectivos y amenazas a comerciantes, y funcionarios oficiales, 'Pablo' y sus hombres se convirtieron en los personajes más temidos de la región" (Semana 2003).

En términos de la cartografía de la guerra, los paramilitares tienen mayor control y presencia sobre las áreas costeras y los centros urbanos, mientras que la guerrilla se mueve en el pie de monte y sus áreas adyacentes: "... los paramilitares controlan las zonas urbanas y la guerrilla las

<sup>13</sup> La Pastoral Social, dirigida por la hermana Yolanda Serón, además de su estrecho trabajo con ACAPA, impulsaba un proceso de capacitación y formación en las comunidades de los Consejos Comunitarios Alto Mira y Frontera, Rosario, Imbilpi del Carmen en el conocimiento y aplicación de la tutela, derecho de petición y derechos fundamentales, entre otros. A partir de la amenaza vía telefónica que mencionamos en la anterior sección, los miembros de la Pastoral Social empezaron a percibir que eran vigilados desde vehículos desprovistos de placas. El programa de radio "La Caja de Pandora" producido por la Pastoral Social, en el que los vecinos podían presentar sus motivos de preocupación relacionados con la ciudad, fue suspendido como consecuencia de las amenazas que había recibido su productor. Estos hechos generaron dilemas en sobre si era pertinente la continuación del trabajo organizativo. Pero a pesar de todo la hermana Yolanda y el padre Guillermo seguían en la denuncia, acompañamiento a algunas comunidades y produciendo la información para el trabajo social. Con el asesinato de la hermana Yolanda Cerón ese momento la situación organizativa se tornó más tirante y preocupante, ya que los señalamientos, persecución y amenaza fueron las causantes del desplazamiento de muchos líderes.

<sup>14</sup> En este sentido, según un artículo publicado en El Espectador que menciona como fuente a un desertor de los paramilitares, "El jefe general de los paras en Tumaco se llama Pablo, y en el área urbana la organización está a cargo de Gustavo. El contacto para la seguridad se hizo con un antiguo miembro del Comando de la Marina, y son financiados especialmente por seis de las más grandes empresas que operan allí. La cobertura política la aseguró un cacique de la región, y la meta es asegurar el control que permita restablecer la maquinaria del tráfico de drogas y armas, que resultó bastante maltrecho luego de la llamada Operación Milenio" (Castillo 2001).

<sup>15</sup> En una segunda fase, este discurso del 'orden' social lleva a la intervención y regulación del cuerpo, sexualidad, movilidad y ocio de los individuos mediante amenazas y, cuando esto no funciona, asesinatos de quienes se desvían de la norma.

zonas rurales, aunque en la zona sur de Tumaco, en su parte rural existe un campamento de los grupos paramilitares” (PCN 2001:6). Por su parte, el ejército y la policía tienen asiento en Tumaco y algunos poblados, desde donde despliegan operativos de mediana o gran embergadura (como la operación tsumani). Como lo indicaba uno de los soldados heridos en el reciente ataque de la guerrilla a Iscuandé, “[...] de ahí para arriba las FARC dominan la región...” (El Espectador 2005/03/02).

### **Factores e interpretaciones de la irrupción del conflicto**

Con respecto a la irrupción del conflicto armado en la región del Pacífico nariñense circulan diferentes interpretaciones. Aunque existen algunos ‘datos duros’ sobre los que todos confluyen (como el día de tal masacre o el asesinato de tal persona), se dan diferencias sustantivas en cómo se interpretan. Igualmente, hay otras serie de ‘datos’ (como que el grupo tal es el responsable por determinada acción) sobre los que no todos confluyen. Por su parte, las interpretaciones se diferencian en cuanto a la caracterización de los actores armados,<sup>16</sup> así como en los móviles que explican su presencia y enraizamiento en la región<sup>17</sup>. Con base en los documentos y publicaciones a las que se ha tenido acceso, se pueden establecer una serie de interpretaciones que van desde aquellos asociados a los funcionarios o a las instituciones del aparato estatal hasta los que operan entre los académicos, las organizaciones no gubernamentales y las organizaciones étnico-territoriales o étnico-culturales. En lo que sigue intentare desagregar los diferentes factores, teniendo presente el lugar desde el cual se establece la interpretación.

Como ha sido indicado, en menos de media década el Pacífico nariñense pasó de ser una región relativamente al margen del conflicto armado que se experimenta en casi toda la geografía del país a una que viene siendo fuertemente disputada por los diferentes actores armados. Dentro de los factores de esta transformación se consideran como los más destacados el súbito incremento de las plantaciones de coca, así como de las actividades relacionadas con su proceso y comercialización. Estos factores, a su vez, se concatenan con otros que han influido fuertemente como son los efectos de las estrategias antinarcóticos desplegadas en el marco del Plan Colombia, sobre todo en el vecino departamento del Putumayo, y las repercusiones en lo regional de las dinámicas de la guerra entre los actores.

No parece ser gratuito que en unos cuantos años se hagan presentes el conjunto de los actores armados en la región. La eclosión de cultivos de coca es indicada como uno de los factores más relevantes para explicar su repentina presencia y la inusitada tenacidad de las confrontaciones por el control militar de la región. Aunque desde mediados de los ochenta se encontraban cultivos en áreas como el río Satinga y Sanquianga (Bravo 2004), es sólo hasta la segunda mitad de los noventa cuando se extienden y adquieren predominancia en la economía de la región.

Dos aspectos interrelacionados estuvieron en juego en esta eclosión de los cultivos de coca. El primero es la puesta en marcha del Plan Colombia,<sup>18</sup> cuyo centro de operaciones ha sido el

<sup>16</sup> Lo cual empieza a variar desde cómo se los denomina. Así, por ejemplo, en el documento de la Vicepresidencia (2002) se habla de ‘autodefensas’, mientras que en muchos de los artículos de prensa o de las revistas se les identifica como ‘paramilitares’.

<sup>17</sup> Para continuar con el ejemplo del documento de la Vicepresidencia mencionado, el conflicto se explica por los intereses de las FARC en ampliar su dominio como por los de los narcotraficantes de invertir en la región, sin hacer siquiera una mención de pasada a los efectos del Plan Colombia. Del otro lado, no falta quien remite el grueso de la explicación a la mano invisible del neoliberalismo y de los intereses dependientes de futuros megaproyectos de la región.

departamento del Putumayo, ha propiciado un traslado de los cultivos y de todo el andamiaje asociado a los mismos hacia otros lugares entre los que el Pacífico nariñense ocupa un lugar destacado: “La mayoría de los cultivos de coca del Putumayo se han trasladado hacia Nariño (municipios de Llorente, Barbacoas y zona rural de Tumaco, principalmente en el río Chagüí) [...]” (Codhes 2003: 4). El énfasis en la fumigación de los cultivos de coca en el Putumayo, así como las intervenciones militares en la región —desprendidas del Plan Colombia como una estrategia de eliminación de éstos cultivos esencialmente represiva y con un tono claramente ligado a la lucha contra la subversión—, fueron presionando a gentes involucradas en las plantaciones ha emigrar hacia otros lugares con condiciones más favorables. Algunos de estos colonos y raspachines habían llegado de tiempo atrás de la costa Pacífica detrás de los beneficios de la bonanza coquera del Putumayo.<sup>19</sup> Ante la creciente presión, entonces, muchos de estos decidieron regresar. El grueso de quienes vinieron al Pacífico, sin embargo, eran colonos o raspachines que llegaron al Putumayo desde distantes regiones, muchos de ellos huyendo de la violencia política o económica a la que habían sido sometidos. El caso de Llorente es muy dicente al respecto:

“Llorente pasó de tener una población que hace dos años no superaba las 1.500 personas, a convertirse en un gigantesco asentamiento invadido por cerca de 20.000 desplazados provenientes de Putumayo y del Caquetá, dice Óscar Seidel Morales, alcalde de Tumaco, quien achaca el fenómeno a los últimos operativos antidroga del Ejército y a la fumigación de los cultivos en esos lugares” (Jiménez 2001).

En este sentido, la eclosión de los cultivos en la región se asocia a la llegada de una ola de gentes, muchas de ellas foráneas, buscando nuevas tierras: “Tumaco llegó a esta situación como reacción al Plan Colombia: la presión que vivía Putumayo es hoy la del puerto” (Castillo 2001). A esto, también se le sumó un cambio en la tecnología de siembra para responder a la estrategia represiva basada en fumigaciones aéreas y en esporádicos despliegues de fuerza militar. En la región de Pacífico se ha implementado una tecnología de siembra de mayor dispersión geográfica de las plantaciones y de reducción del tamaño de cada una de las mismas. Como ha traído como consecuencia “[...] aumento en el número de municipios en donde hay cultivos, aunque estos considerados en su totalidad representen un área menor” (Codhes 2003: 4).

Una tesis semejante de la relación incremento de cultivos ilícitos con la predominancia de los actores armados para el conjunto del departamento de Nariño, es planeada por el mismo gobierno:

“Como factor más importante en la explicación del protagonismo armado adquirido por los actores del conflicto a partir de la primera mitad de la década del noventa, se destaca

]

<sup>18</sup> Según información oficial, las fumigaciones aéreas, dentro del marco del Plan Colombia, comenzaron oficialmente en el departamento del Putumayo el 22 de diciembre del 2000. Hasta el 28 de enero del 2001 se fumigaron alrededor de 29.000 hectáreas; durante el 2001 se fumigaron 94.000 hectáreas. La Policía Antinarcoóticos confirmó el incremento de más del 42 por ciento en la aspersión de cultivos de coca en el 2002, especialmente en Putumayo, donde existían más de 50.000 hectáreas de coca.

<sup>19</sup> “Y es que la tendencia general del desplazamiento en Nariño —recepción y expulsión— continúa su curva ascendente, pues de las 134 familias desplazadas por la violencia, que registraban las estadísticas de la Red de Solidaridad Social en Nariño a junio del 2000, la cifra se disparó a 3.508 en abril de este año. De estas familias reportadas, el 95% de ellas proceden del Putumayo. Además existen otras 1.300 declaraciones de afectados que aseguran ser desplazados, cuyos casos están siendo estudiados. *Gran parte de los desplazados son nariñenses, o personas con raíces en este departamento, que viajaron años atrás al Putumayo, buscando la 'bonanza' del tráfico y comercialización de cultivos ilícitos y que ante la erradicación de éstos, deben volver a sus tierras*” (El País 2002/05/13; énfasis agregado).

el crecimiento de los cultivos ilegales. Los frentes guerrilleros que comenzaron a promover la siembra de amapola fueron el 29 y el 8 de las FARC y el Comuneros de Sur del ELN que desde los inicios de la bonanza impulsaron el cultivo entre los pequeños campesinos e impidieron la entrada de grandes productores [...] Al mismo tiempo, las autodefensas rivalizan con la guerrilla al desplegar su presencia sobre la zona productora de coca en el sur occidente del departamento, desde Tumaco hasta El Diviso en jurisdicción de Ricaurte y desde allí hasta Barbacoas para tener el control del Río Patía hacia el Pacífico pasando por los municipios de Roberto Payán y Francisco Pizarro. Corredor clave para la economía coquera regional en el suroccidente, es la carretera al mar con epicentro en Llorente en Jurisdicción de Tumaco. Hacia el noroccidente del departamento la producción y procesamiento de coca han aumentado al amparo de la presencia preponderante de las FARC en el Charco y Santa Bárbara” (Vicepresidencia 2002: 13).

El otro aspecto se refiere a que la eclosión de estos cultivos debe entenderse como una intervención directa de las guerrillas y los paramilitares propiciando, garantizando y disputando el control sobre estas plantaciones. Esto se ha dado en dos sentidos. Por un lado, estimulando (y a veces presionando) el cultivo entre las gentes que llegan y entre los pobladores locales. Este estímulo ha sido indirecto, al permitir que terceros distribuyan semillas y otros recursos necesarios para adelantar los cultivos (recurriendo al mecanismo del endeude) y luego estableciendo impuestos sobre las cosechas y regulando precios. Del otro lado, el estímulo es directo cuando a través de su mediación se desplazan los pobladores locales de aquellos terrenos aptos para el cultivo de coca, ‘re-poblando’ estas áreas con nueva gente ideológicamente afín para que adelanten las plantaciones. En este sentido, diferentes actores armados

“[...] están utilizando como estrategia para la apropiación de terrenos aptos para el cultivo, las incursiones, la intimidación, las amenazas, los asesinatos selectivos, el despojo y el desplazamiento de las comunidades. Según testimonios de la comunidad recogidos durante visitas al terreno, en Tumaco ‘el desplazamiento hacia el casco urbano se ha incrementado y las zonas abandonadas son utilizadas por los actores armados para cultivar grandes extensiones de coca o para ubicarse allí con sus familiares, amigos y otros miembros de los grupos armados’” (Codhes 2003: 4).

Otra de los factores que explican la presencia de disímiles actores armados y la escalada del conflicto se refiere a lo estratégico de la región para el comercio de drogas, sean estas producidas allí mismo en el Pacífico nariñense o en otros lugares del país. En efecto, “[s]egún la DEA, 90 por ciento de la droga que sale de Colombia lo hace por vía marítima, de allí que quien domine las costas del país tendrá el poder ya que todos los narcos se verían obligados a negociar con ellos” (Semana 2003).

Es la posición geográfica de la costa nariñense una de las más adecuadas para este comercio, no sólo por el creciente procesamiento del alcaloide en este departamento, sino por su vecindad con el Putumayo y el Ecuador. La morfología de la costa del Pacífico sur, atiborrada de esteros y manglares, cruzada por innumerables ríos y afluentes que se internan en lo más profundo de las selvas, facilita la operación de lanchas extra rápidas con las cuales se puede sacar el alcaloide hacia Centroamérica y, de allí, hacia Norteamérica. Igualmente, el continuo fluir de botes que transportan la madera proveniente de las decenas de aserríos facilita el camuflaje de la droga hasta el puerto de Buenaventura. En este fluir de drogas, también se cuentan las provisiones para el procesamiento y las armas, las que se pueden fácilmente introducir desde el Ecuador, siguiendo la filigrana de esteros o por tierra, o desde el puerto de Buenaventura en los botes o lanchas descritas. En este sentido, el Pacífico nariñense adquiere una relevancia estratégica para los diferentes actores armados. Así, por ejemplo, en una entrevista publicada en su página

electrónica, “[...] el comandante general de las FARC reconocía públicamente el interés estratégico de este grupo por controlar la zona marítima en el sur del país.” (Agudelo 2001).

Sin embargo, según el artículo publicado en *Semana* antes citado, no todos los actores armados se encuentran en la misma posición con respecto a la producción y comercialización de la droga:

“Todos los sitios bajo su control [el del comandante ‘Pablo’ de los paramilitares] son puntos estratégicos para el embarque de droga hacia el exterior. Pero también son zonas en donde están instalados la mayor parte de los laboratorios y cristalizadores de droga. Esto le ha permitido a ‘Pablo’ tener un control total de toda la cadena del tráfico de drogas. Mientras las FARC participan de las utilidades del negocio, cobrando impuestos al gramaje, el comandante ‘Pablo’ controla desde la producción hasta el embarque. “El control del negocio por parte de ‘Pablo’ llegó a tal punto que desplazó a algunos narcos, que en un comienzo lo apoyaron, y se quedó con la totalidad de sus negocios.” (Semana 2003).

Para miembros de las fuerzas militares, estos factores son los que explican la presencia y escalada del conflicto en el Pacífico nariñense:

“El desplazamiento de los cultivos y laboratorios hacia las selvas de la Costa Pacífica, ha transformado a esta región en el escenario de mayor actividad de narcotráfico en el país’, explicó a *Semana* el comandante de la Armada Nacional, almirante Mauricio Soto. Las cifras de droga decomisada por la Armada hablan por sí mismas. En 2002 las Fuerzas Militares y la Policía incautaron en todo el país cerca de 90 toneladas de coca, de esta cifra la Marina incautó 57,8 toneladas de coca, la gran mayoría en las costas nariñenses. ‘Cuando llegaron los narcos comenzó a llegar la guerrilla y después los paracos, afirma un funcionario de la gobernación de Nariño. Primero llegó el ELN, hace cinco o seis años, pero las FARC los desplazaron. Cuando el frente 29 de las FARC parecía que tenía el control llegaron los paracos y hoy son ellos los que dominan el grueso del negocio’, dijo el funcionario” (Semana 2003).

Además de los factores descritos, específicamente para la presencia de los paramilitares en la zona desde las organizaciones populares se ha argüido concretamente su vínculo con los industriales de la palma africana. Así, en un encuentro convocado por las comunidades chocóanas y de Mutatá, en Antioquia, y la organización Human Rights Everywhere:

“Los dirigentes de Tumaco y municipios vecinos manifestaron su preocupación [...] [porque] ‘desde el 2001 han ocurrido 11 ataques paramilitares contra la población civil de las cuencas de ese departamento. Muchos de los argumentos de los agresores estaban amparados en que las tierras debían estar listar para sembrar la palma. Entre 1997 y el 2004 se han registrado 200 asesinatos en la zona, además de innumerables desapariciones y violaciones de los derechos’. La situación es delicada ya que los nativos dueños de tierras han sido despojados de su propiedad a través de ocupación ilegal de hombres armados y sometidos a ‘esclavitud’, obligándolos a trabajar para ellos y pagándoles con vales” (Diario del Sur 2004/02/12).

Para no pocos activistas, los factores de fondo que explican la escalada del conflicto en el Pacífico nariñense son la implementación de políticas neoliberales y los grandes proyectos de desarrollo que apuntan a revertir los logros territoriales y políticos alcanzados por el proceso organizativo de comunidades negras:

“Estos hechos de múltiples asesinatos, desapariciones y masacres tal como la ocurrida en la vereda Llorente en el municipio de Tumaco, Barbacoas, Satinga, Iscuandé y de manera general en el Departamento de Nariño no son casos aislados; todos estos casos se

relacionan con la apertura económica y las políticas neoliberales que se están implementando en la zona a través del Plan Colombia; implementación de grandes mega proyectos, como son los diferentes monocultivos de palma africana, el cultivo de usos ilícitos, los actores armados, la expansión del casco urbano de Tumaco, la realización de la carretera Binacional Tumaco- Esmeraldas, el plan turístico de Tumaco, los planes y decretos para las zonas de baja mar del litoral Pacífico Nariñense, políticas incoherentes de Ecopetrol, políticas gubernamentales y terratenientes que desarrollan una serie de investigaciones en las diferentes zonas del orden local, regional, nacional e internacional, obstaculizaron así el proceso que se viene desarrollando con las comunidades negras, especialmente a lo que se refiere al desarrollo territorial, cultural, económico, político y la defensa de los derechos humanos” (PCN sf.: 3).

Entre los académicos que han abordado diversos aspectos de la emergencia y consolidación del conflicto en el Pacífico en su conjunto, se ha generalizado la tesis de que la escalada y el ampliamiento de las dinámicas de guerra o su creciente imbricación en el negocio del narcotráfico (tanto en su agencia como quienes se legitiman en el plano internacional o en el nacional mediante su combate) no son suficientes para entender lo que ha sucedido en la región desde la segunda mitad de los años noventa. Para el grueso de los académicos lo que está en juego en la disputa por el control militar del Pacífico dadas las tecnologías de terror instrumentalizadas contra sus pobladores locales y, en particular, contra sus diversas expresiones organizativas apunta a revertir de hecho los alcances de los reconocimientos territoriales y a una inserción por la fuerza a un proyecto de nación que supone el borramiento de las condiciones de existencia de la diversidad cultural y biológica de la región. Por tanto, lo que experimentan las poblaciones locales no son simple efectos colaterales de la perversa operación de las maquinarias de guerra cada vez más entrapadas en el capital económico y político proveniente del narcotráfico o de su combate, sino que también se articulan una amalgama de intereses sobre la región incompatibles con el empoderamiento logrado por los pobladores locales mediante el reconocimiento de sus derechos territoriales y étnicos.

“No fue pues el desbordamiento de las tensiones y conflictos locales entre los diferentes actores sociales con intereses opuestos en la región, los que causan la crisis de derechos humanos que hoy se vive en el Pacífico colombiano. Pero, aunque son factores exógenos los que alimentan la situación de crisis hay elementos de la situación regional que la inscriben como parte del conflicto. La ubicación geográfica estratégica para los actores armados, las perspectivas de macroproyectos de desarrollo, el potencial de recursos naturales explotables, son entre otros, aspectos que explican el por qué de la transformación de la región en un escenario principal del conflicto.” (Agudelo 2001).

“What factors explain the spread of violence into the Chocó? On the one hand, it can be understood as part of the escalation and banalisation of armed conflict on the national level. Here an important motive appears to be the increasingly fierce competition for territorial control between the different armed actors [...] Nevertheless, in the Chocó the arrival of violence is not seen as something fortuitous, or as the simple extension of the armed conflict on the national level. Many people including peasants, civil servants, members of NGOs, and church people maintain that the rise of violence in this part of Colombia has to do with economic interests and the resource and development potential of the region [...]

I argue that we must consider the process of collective land entitlement as another complicating factor in its own right. Although Law 70 of 1993 has provided more territorial security to the local population, this at the same time has been making actual or potential interested parties aware of the possibility that the land was going to be the legal and permanent property of the local black communities. In other words, the new legislation not only became a tool for ethnic empowerment, but it also generated new territorial conflicts. Key for the escalation of this conflict in the Chocó has been the lack of political will and institutional capacity of the state and

the official security forces to ensure and protect the territorial rights of the black Communities” (Wouters 2001: 510, 511).

“Desde las condiciones nacionales, porque se trata de una ‘limpieza étnica’ que vacía sus territorios ancestrales de comunidades reales y que políticamente tiene el efecto de golpear muy duramente el proceso de construcción autónoma de sus territorios y hacer retroceder a todos (movimiento étnico negro, Estado y sociedad) en los pasos que se habían dado hacia una salida inédita para resolver la secular cuestión de las relaciones entre etnias, Estado y nación en Colombia. Desde el contexto globalizado, porque por cuenta de la guerra y sus consecuencias, ahora es más fácil para el gran capital, los intereses transnacionales y el propio Estado y la sociedad colombianos, que se han reclamado siempre como los únicos interlocutores válidos frente a los primeros desconociendo a los grupos étnicos, imponer sus modelos de desarrollo en la región. (Almario 2004: 98)

“En la región del Pacífico, el fenómeno del desplazamiento tiene un nexo evidente con el conflicto armado, y más concretamente con las actividades de los grupos paramilitares y los guerrilleros, que aplican estrategias de terror, asesinan en masa a las poblaciones y las obligan a desplazarse para controlar no sólo unos territorios ricos en biodiversidad y recursos naturales, sino también los grandes proyectos de desarrollo” (Escobar 2004: 58).

### [3]

#### **Implicaciones en el proceso organizativo de comunidades negras**

Las implicaciones de que actores armados como las guerrillas, los paramilitares y las fuerzas militares se disputen la región del Pacífico nariñense deben examinarse en diferentes planos. Mientras que algunas de estas implicaciones han sido inmediatas y pueden directamente asociarse a su presencia y disputa, otras hay que examinarlas en un mediano plazo y más como ‘efectos colaterales’ o indirectos. De la misma manera, mientras unas involucran a determinadas esferas del proceso organizativo, pueden no impactar de la misma forma otras esferas. Aunque en general apuntan hacia la ruptura y la pérdida, no deben analizarse simplemente en negativo porque a propósito de éstas se han articulado respuestas y estrategias que deben ser igualmente objeto del análisis. Al igual que sería absurdo analítico y político endosarle todas las dificultades del proceso organizativo de comunidades negras en la región a la súbita escalada del conflicto, sería desatinado subestimar sus efectos.

Otro aspecto nodal del análisis es que, como ha sido expuesto en el aparte inmediatamente anterior, no se puede desligar los impactos de este conflicto armado de los procesos a los que se encuentra estrechamente asociado, pero que no son reductibles al mismo. Esto es, es indispensable introducir en el análisis de los efectos las transformaciones de la economía y la demografía de la región ligadas al narcotráfico, así como éstas en el lugar que ocupan en las dinámicas más generales de las estrategias de la guerra en Colombia que han tomado los diferentes actores armados, incluyendo al aparato de estado.

#### **Líderes, organizaciones y proyecto: escalas de los efectos del conflicto**

El impacto en los líderes, lo organizativo y el proyecto constituye toda una ‘ingeniería social’ que lleva a la reestructuración profunda de las relaciones entre las poblaciones locales y ciertas expresiones de la sociedad colombiana. Como lo anotaba Arturo Escobar:

“El terror y los desplazamientos tienen por finalidad desbaratar los proyectos de las comunidades, quebrantar su resistencia y, probablemente, lograr incluso su exterminio, lo cual se ve facilitado por la utilización cada vez mayor de armas de fuego [...] el objetivo de los desplazamientos es reestructurar las relaciones entre las comunidades étnicas y la sociedad colombiana de tal manera que se logre borrar toda diferencia cultural. En otras palabras, el proyecto dominante tiende a reorganizar el territorio y la población, lo cual hace casi impensable, o totalmente inimaginable, la existencia de una autonomía en el marco del Estado-nación” (2004: 61).

Con una intención expositiva, se podrían diferenciar tres escalas del proceso organizativo de comunidades negras para entender más claramente las diferentes implicaciones de la irrupción del conflicto armado en el mismo. En primer lugar, se puede identificar la escala de los líderes de las organizaciones étnico-territoriales o étnico-culturales. Dentro de los líderes se pueden distinguir entre los ‘líderes históricos’ y ‘nuevos líderes’. Los primeros serían aquellos que participaron en el proceso de la definición de la Ley 70, en la creación de las organizaciones étnico-territoriales y en la estructuración de Palenque Nariño como entidad regional. Los ‘nuevos líderes’ estarían constituidos por quienes han llegado más recientemente a hacer parte de los consejos comunitarios y de las ya consolidadas organizaciones étnico-territoriales. Con respecto a los primeros, cabe anotar que muchos de los que estaban en Tumaco salieron de la ciudad entre el 2001 y el 2002, casi en su totalidad para Bogotá. Algunos salieron desplazados y bajo amenazas, otros debido a diferentes circunstancias menos directamente relacionadas con la escalada del conflicto, pero en medio de la zozobra que causó el asesinato de la Hermana Yolanda Cerón, las amenazas directas sobre algunos de sus compañeros y del desplome del Palenque como entidad coordinadora regional. Esta salida, pensada inicialmente como provisional y por razones de seguridad, se ha ido tornando más permanente. Cada vez se hace más difícil el regreso. Por su parte, gran parte de los ‘líderes históricos’ del proceso organizativo que se encontraban en las zonas rurales, han tendido a desplegar una estrategia de bajar su perfil y visibilidad en lo local donde hacen presencia los actores armados. Así, como lo argumenta Hernando Bravo en su detallado estudio etnográfico en los ríos Satinga y Sanquianga:

“En la actualidad, los más importantes líderes del otrora Palenque Regional Nariño se hallan en Bogotá en situación de desplazamiento, forzados por la agudización del conflicto armado y por la presencia de actores interesados en el control del negocio que se expande a lo largo de la llanura del Pacífico y que viene transformando los sistemas productivos tradicionales mineros, agrícolas, pesqueros en diversas áreas del litoral Pacífico nariñense. Y, aunque los líderes locales de la Asociación de Consejos Comunitarios de las Zonas Norte y Centro de la Costa Pacífica de Nariño, entre quienes se incluyen los dirigentes de los ríos Satinga y Sanquianga, no han salido expulsados de sus localidades, si han entrado en un proceso de invisibilización estratégica o, en otros términos, se hallan en situación de “emplazamiento forzado” [...] sin posibilidades de promover procesos de movilización comunitaria y de tomar iniciativas políticas para fortalecer sus procesos organizativos en favor de la cristalización de los derechos que la Ley 70 de 1993 les reconoce en sus territorios colectivos” (Bravo 2003: 134).

De esta manera, un efecto asociado a la irrupción del conflicto en la escala de la dirigencia, específicamente para el grueso de los ‘líderes históricos’, ha sido su salida de la región o su permanencia desde una ‘invisibilidad estratégica’.

No obstante, con respecto a los ‘nuevos líderes’ este no es necesariamente el caso. Aunque algunos de ellos han tenido que salir o operar desde la ‘invisibilidad estratégica’ que se acaba de mencionar para los ‘líderes históricos’, existen muchos ‘nuevos líderes’ para los cuales la irrupción del conflicto ha significado, precisamente, lo contrario: su posicionamiento. Aunque es

muy difícil generalizar, y más aun cuando se piensa en términos de mediano y largo plazo, es un hecho que muchos líderes de consejos comunitarios, sobre todo de aquellos ligados a la naciente RECONPAS, han logrado posicionar su liderazgo en medio de la escalada del conflicto. Dos son los factores que coadyuvarían a explicar esta aparente paradoja. De un lado, algunos de estos líderes se han enfocado hacia el desarrollo de proyectos de producción (sobre todo los de la palma africana o del coco) a través de organizaciones con fuerte influencia entre los empresarios de la región como Cordeagropaz o de amplia trayectoria como Coagropacifico. En este sentido constituyen unos aliados, por lo menos en lo inmediato, con las intervenciones del capital en la región; diferenciándose en esto claramente de los 'líderes históricos' que eran vistos por muchos empresarios como 'problemáticos' y contrarios a sus intereses. De otro lado, otros nuevos líderes han operado enfocándose localmente en los espacios abiertos por la institucionalidad que no cuestionan a los actores armados ni a quienes se relacionan mas directamente con ellos, sean personas de la población local o foráneos. Ante la invisibilización estratégica de los 'líderes históricos' se abren espacios de posicionamiento de estos nuevos líderes.

Por tanto, en la escala de los líderes, el efecto combinado de salida e invisibilidad estratégica de los líderes históricos y el posicionamiento de los nuevos ha significado la consolidación de un relevo generacional de los actuales líderes visibles del proceso organizativo de comunidades negras en lo local y regional. Este relevo generacional, como veremos más adelante, no es un simple cambio de personas, sino también un giro en el perfil de las organizaciones y, más aún, en el proyecto étnico tal como se gestó en los noventa. Además, este relevo no ha estado exento de contradicciones entre los líderes históricos y los nuevos. Estas contradicciones han sido enmarcadas, desde los 'líderes históricos' desde argumentos de 'coaptación'. 'oportunismo' y 'falta de perfil' de algunos de los 'nuevos líderes'; mientras que de parte de estos últimos se han esgrimido corrupción y clientelismo de algunos de los primeros.

Los consejos comunitarios y organizaciones en sí mismas y en su accionar constituyen la segunda escala en la cual se pueden analizar los efectos de la irrupción del conflicto armado en la región para el proceso organizativo de comunidades negras. Aunque se pueden identificar algunos consejos comunitarios y organizaciones que se han fortalecido puntualmente en el contexto del conflicto armado (pero no necesariamente debido a éste), en términos generales para la región el efecto de la irrupción de este conflicto ha sido precipitar y profundizar el proceso de reflujo organizativo de los consejos comunitarios y organizaciones en su conjunto.<sup>20</sup> Como fue ya expuesto, después de un monumental proceso de empoderamiento de las organizaciones y sus líderes durante varios años que transformó en múltiples esferas el campo político y de la propiedad sobre la tierra de la región, para finales de los noventa era clara la afloración de ciertas tensiones al interior de las dinámicas organizativas en torno a los ejes de la representación y la concepción de los alcances de su proyecto político. La irrupción del conflicto armado y los factores asociados, hicieron que lo que se insinuaba como una tendencia en el proceso organizativo se precipitara y profundizara.

El reflujo organizativo se consolida de forma directa por la eliminación de los líderes (ya sea asesinandolos, obligandolos a salir de la región o amedrentandolos) o por la prohibición de cualquier actividad de las organizaciones o consejos comunitarios.<sup>21</sup> Con respecto a la

L

<sup>20</sup> Este planteamiento del 'reflujo organizativo' ha sido desarrollada en detalle en la tesis de maestría del antropólogo Hernando Bravo (2003) para la zona de los ríos Satinga y Sanquianga. De ahí la he tomado y, en términos generales, la considero aplicable al conjunto de la región del Pacífico nariñense.

eliminación de los líderes, un ejemplo es el del Consejo Comunitario La Nupa, cerca de Tumaco: “El Consejo Comunitario [La Nupa] surgió en 1995 como parte de un proceso de organización y de asociación interna en el que las mujeres han sido determinantes desde 1991. Antes tenían la Asociación de la Carretera y del río Caunapí, hoy son un Consejo Comunitarios que reúne a cerca de 1500 familias y que tiene a la gran mayoría de los integrantes de su junta directiva desplazada y al presidente, José Arístides Rivera, asesinado el 2 de diciembre de 2002” (Valvueda 2003: 35).

Sobre las prohibiciones explícitas, por ejemplo, encontramos que Bocas de Satinga, cabecera del Municipio de Olaya Herrera:

“[...] del Proceso de Comunidades Negras no volvieron a hablar ni siquiera sus más representativos dirigentes. A la llegada de los paras, uno de sus anuncios fue que quedaba prohibido cualquier tipo de reunión no autorizada por ellos, al tiempo que incursionaron en la sede de las organizaciones comunitarias campesinas y del proceso, quemando sus archivos y estableciendo un veto para los trabajos de la naturaleza de los desarrollados por estos [...] Desde entonces, los líderes de comunidades negras no realizan acciones encaminadas a promover la reglamentación de la Ley 70 y la elaboración de los Planes de Manejo de sus territorios. La mayor parte de ellos han debido aislarse de cualquier actividad política y dedicarse a laborar en diferentes oficios [...]” (Bravo 2003: 142-143, 144).

Además de esta forma directa, el reflujo organizativo se consolida indirectamente ante la irrupción del conflicto armado cuando el entramado institucional sobre el que se había edificado el empoderamiento organizativo deja de operar o se transforma para orientarse hacia el enfrentamiento militar y represivo de actores armados de extrema derecha e izquierda así como a las estructuras delincuenciales asociadas al narcotráfico. Para decirlo en otras palabras, de un entramado institucional (compuesto por programas y entidades del aparato de estado así como de las organizaciones no gubernamentales) que se había tornado relativamente sensible a las demandas étnicas y que había nutrido con recursos concretos acciones y dinámicas organizativas, con la irrupción del conflicto y de la economía del narcotráfico este entramado institucional desaparece o gira hacia labores referidas ya sea a la represión o a la atención de corte humanitario.

Paulatinamente han ido desapareciendo los proyectos orientados hacia la conservación de la biodiversidad o de manejo sostenible de recursos naturales que durante los noventa fueron cruciales para el flujo de recursos económicos y para el desarrollo de agendas y políticas para el movimiento organizativo (como el Proyecto Biopacífico, el Proyecto Guandal, el Proyecto Naidi o el Proyecto Manglares). Igualmente, han desaparecido espacios mixtos como los Comités Regionales (donde en un varias instituciones estatales confluían con representantes de las organizaciones étnico-territoriales) que alimentaron el empoderamiento del proceso organizativo

]

<sup>21</sup> Este efecto en las dinámicas organizativas por la acción directa de los actores armados es explícitamente enunciado por los activistas del Proceso de Comunidades Negras: “Desde el año 1998, hasta la fecha han sido tiempos excepcionalmente graves y difíciles para las Comunidades Negras obligada a disminuir su trabajo social, debido a masacres, amenazas, actos violentos y asesinatos, como por ejemplo el caso del Representante Legal del Consejo Comunitario del Alto Mira y Frontera, señor Francisco Hurtado Cabezas, a desplazarnos de forma masiva de nuestros lugares de residencia, lucha y trabajo hacia los cascos urbanos de los municipios más cercanos y las zonas subnormales de las grandes capitales ... Por lo anterior se requiere que las organizaciones no gubernamentales que han venido siendo solidarias con el Proceso de Comunidades Negras, hoy mas que nunca acompañen y contribuyan al no debilitamiento de nuestra lucha, ayudando a garantizar a los compañeros que hoy estamos desplazados unas mínimas condiciones que les permita continuar desde acá con el trabajo de fortalecimiento organizativo a las comunidades que están en resistencia en sus respectivas regiones.” (PCN 2001: 3).

en la región. Aunque la desaparición de estos proyectos y espacios no se debe directa ni únicamente a la irrupción del conflicto armado, no se puede tampoco afirmar que este no tiene nada que ver en ello. Lo que sí es claro es que el reflujo organizativo étnico-territorial ha sido agudizado por la falta de las condiciones institucionales ideales sobre las que se gestó y operó en los noventa.

Este reflujo organizativo no debe entenderse sólo en negativo, esto es, como pérdida y parálisis. También ha implicado la articulación de un importante viraje en las estrategias y discursos organizativos en los cuales se insertan como prioridades la defensa de los derechos humanos y, más particularmente, la defensa del derecho a la vida de estas poblaciones en sus territorios con autonomía y respeto de los diferentes actores armados: “La reivindicación de los derechos ya no sólo se plantea alrededor de la titulación colectiva o del reconocimiento de su identidad como afrodescendientes, sino alrededor del respeto de sus proyectos de vida, y de los derechos humanos, del derecho a vivir en paz y a construir su propio desarrollo” (Bravo 2003: 189).

Así, gran parte de los líderes que han salido de la región han continuado con su trabajo organizativo desde los nuevos lugares y en otras esferas del proceso. Es de destacar la consolidación de la oficina del PCN en Bogotá con la participación de un buen número de los líderes históricos del Palenque nariño. Entre otras cosas, esto ha significado no sólo la posibilidad de apuntalar algunas dinámicas organizativas del Pacífico nariñense y de apoyo desde afuera<sup>22</sup> para enfrentar los efectos de la escalada del conflicto armado en la región acercándose a organizaciones no gubernamentales solidarias y moviéndose en las instituciones estatales con asiento en la capital,<sup>23</sup> sino que ha sensibilizado el proceso organizativo en su conjunto sobre cómo asumir políticamente las múltiples dinámicas y experiencias urbanas de la gente negra en Colombia. En este sentido, ese reflujo organizativo perfila también los albores de una reconfiguración y giro del proceso organizativo resituando los derechos de la gente negra como grupo étnico más allá de los supuestos que han prevalecido encarnados en la Ley 70 de 1993.<sup>24</sup>

Cabe anotar el drama experimentado por los líderes que subitamente han abandonado el Pacífico nariñense. En uno de los pocos estudios existentes sobre mujeres migrantes del Pacífico sur colombiano a Bogotá, Alcira Rodríguez (2004) evidencia los conflictos de orden personal, social y político al que se enfrentan algunas líderes en un contexto tan diferente al de su región de origen como es la capital. En su intervención sobre conflicto y desplazamiento en un evento académico, una de estas líderes anotaba:

“Yo ya llevo casi tres años en Bogotá, el primer año yo pensaba yo ya me voy, el segundo año, bueno será que me voy a quedar, no pero aquí no es y hoy apenas en el lodo cuando ya empiezo a asumir la vaina que esto va pa’ largo, a penas empecé por ejemplo a comprarme

L

<sup>22</sup> Esto ha abierto las puertas de una estrategia que Oslender ha denominado como ‘globalización de la resistencia’: “[...] se aborda al mismo tiempo una estrategia de internacionalizar su resistencia contra estas guerras o, en otras palabras, de globalizar su lucha. [...] Llevando estas denuncias al plano internacional mediante organismos internacionales y multilaterales, asociaciones de solidaridad con Colombia en el exterior, ONGs, etc., se puede ejercer mayor presión sobre el gobierno colombiano para que proteja a sus ciudadanos. En otras palabras, hay una necesidad de globalizar la resistencia y de ver lo global como oportunidad” (Oslender 2004: 46).

<sup>23</sup> Véase, por ejemplo, en el anexo 2, la propuesta elaborada para enfrentar la escalada del conflicto armado y la violación de los derechos humanos en Nariño.

<sup>24</sup> Estos supuestos, como han sido indicado por varios autores (Agudelo 2004, Wade 1996), han operado desde una noción de alteridad indianizada, comunializada, ruralizada y Pacífico centrada acuñada en una situación pre-conflicto armado.

una cama, porque yo no tenía cama, o sea es una posición que esto no es lo mío, yo no estoy aquí, yo simplemente voy a estar una temporada y luego me voy y no solamente para mí, sino para mucha gente, Bogotá es una ciudad de paso, la ciudad es una ciudad de paso, a diferencia de otra gente, que la situación de conflicto así que ha habido masacres fuertes le ha tocado decir, este, yo no regreso tampoco, yo quiero quedarme pero cuales son mis condiciones para quedarme, que es lo otro.”

Finalmente, el proyecto constituye la tercera escala en la que amerita examinarse los efectos de la irrupción del conflicto armado. Por proyecto se entiende el horizonte político hacia el que apunta y que perfila la especificidad el proceso organizativo de comunidades negras en el Pacífico nariñense. Este horizonte es definido por el conjunto de premisas y propuestas que articulan las prácticas y discursos organizativos de las comunidades negras como grupo étnico, esto es, el entramado de sus políticas culturales (Escobar, Alvarez y Dagnino 2002). Tal como se consolidó en los noventa, este proyecto se expresaba concretamente en la triple e interrelacionada demanda por el territorio, la identidad y la cultura. Territorio que implica no simplemente el derecho a la tierra, sino un ejercicio de territorialidad colectiva con base en la autonomía que apuntaba la reproducción de la naturaleza y de la comunidad. Identidad como la posibilidad del ser comunidad negra, de la igualdad en la diferencia, de la enunciación de una alternativa de futuro desde la dignificación del pasado y presente compartidos. Cultura como el anclaje y amarre del territorio y de la identidad, como el hacer y el imaginar del ser comunidad negra.

Ahora bien, este proyecto se gestó en unas condiciones de lucha que han cambiado radicalmente con la irrupción del conflicto. En primer lugar, el proyecto supone la operación de una estructura institucional garantizada por un estado de derecho ya que con base en el reconocimiento de ciertos principios constitucionales y actos legislativos, las formaciones organizativas que representaban los pobladores locales podían adelantar una serie de acciones concretas frente a otros actores e intereses en aras de materializar su triple demanda por el territorio, la identidad y la cultura. En otras palabras, las dinámicas organizativas suponen un margen mínimo de ejercicio de la democracia y de respeto del estado de derecho desde puedan escrimir los derechos étnico-culturales sancionados por la ley. Con la irrupción del conflicto, los actores armados que disputan desde la ilegalidad la legitimidad del estado de derecho y en el contexto de una economía criminalizada, ya no es viable para la apelación a los mecanismos insituacionales y jurídicos en aras de garantizar este proyecto. El lenguaje de la guerra y de la ‘ilegalidad’ desde el que hablan los diferentes actores en la región, socava las condiciones de posibilidad de un proyecto que supone una apuesta a las transformaciones de relaciones de poder a través de la movilización social en aras de redefinir el marco mismo de la institucionalidad.<sup>25</sup> Así, como lo anota, Ulrich Oslender, “El control territorial de los actores armados inhibe a las comunidades locales para afirmar su territorialidad garantizada en la legislación, pero subvertida en la vida real” (2004: 38).

En segundo lugar, el proyecto supone un conjunto de prácticas y expectativas por parte de las poblaciones locales que han ido cambiando de forma acelerada en los últimos años. Las prácticas hacen referencia a las modalidades tecnológicas, las relaciones y la racionalidad económica considerada como tradicionales en estas poblaciones. Estas ‘prácticas tradicionales de

L

<sup>25</sup> De ahí que no pocos académicos, funcionarios, periodistas y activistas indiquen que no es gratuito que cuando se estaban revirtiendo algunas relaciones de poder consagradas en la región por este proceso organizativo se haya originado y consolidado la situación de guerra que actualmente golpea al Pacífico nariñense en particular y al Pacífico colombiano en general (Véase, por ejemplo, Almario 2004, Escobar 2004, PCN 2001, Semana 2001, Wounters 2001).

producción' se asumen como reproductoras no sólo de una relación armónica con la 'naturaleza' y garantes de la conservación de los 'valores culturales de la comunidad' vitales en su manejo territorial. Las expectativas se refieren al contenido concreto de las nociones de bienestar individual y colectivo en el inmediato, mediato y lejano plazo. En otras palabras, estas expectativas constituyen los contenidos concretos de la voluntad colectiva de futuro. La doble articulación de estas prácticas y expectativas constituye el sustrato económico-social sobre el que se constituye el proyecto.

Con la irrupción del conflicto y, sobre todo, con la creciente dominancia de la economía ligada al narcotráfico este sustrato se ha ido erosionando. De un lado, las denominadas 'prácticas tradicionales de producción' han sido golpeadas con mayor o menor intensidad dependiendo de la fuerza con que se han posicionado los cultivos de coca y las actividades ligadas a la producción y comercialización de los productos derivados.<sup>26</sup> Del otro, con las actividades económicas tradicionales y las relaciones desde las cuales se despliegan han sido impactadas ante la situación de guerra por razones que van desde el emplazamiento forzado, la desaparición de la demanda de productos locales o la avalancha de mercancías que llegan con el boom coquero. Además, con dineros del Plan Colombia, y bajo el impulso de Cordeagropaz, se han consolidado la siembra de palma africana por los pobladores locales.<sup>27</sup> Con respecto a las expectativas la situación no es alentadora. Los patrones de consumo y los mecanismos de prestigio social se ligan cada vez más, y sobre todo en las nuevas generaciones, a nociones de bienestar individual que se hacen incompatibles, cuando no antagonicas, con las definidas en el proyecto del proceso de comunidades negras.

En este sentido, se hace muy relevante el marco analítico propuesto por Oscar Almario (2004) sobre la contradicción cualitativa entre el emergente modelo económico-social (denominado

<sup>26</sup> "Las racionalidades en que se soportan estas iniciativas 'empresariales' [del negocio de cultivo de coca, producción, procesamiento y distribución de cocaína y otros productos ilícitos] son muy complejas en lo económico, político e ideológico. Por una parte, introducen un cultivo exógeno que no hace parte de la tradición agrícola de los negros ni de los indígenas, que altera profundamente los ecosistemas por la manipulación de químicos y fumigaciones o imponen ritmos de trabajo y valores sociales individualizantes y competitivos que, por otra parte, terminan por fracturar memorias y tejidos sociales basados en la solidaridad, la reciprocidad y los lazos de parentesco. Estas prácticas, que se revisten en veces de iniciativas empresariales e inversiones, realmente hay que considerarlas como tecnologías sociales para provocar cambios súbitos y bruscos en las sociedades locales, en tanto inducen a los pobladores al cultivo de coca, aportan el 'plante' para 'arrancar' (semilla, insumos y dinero en efectivo para pago de jornales) y garantizan los compradores y los circuitos complementarios de distribución. En otros casos, con base en esta modalidad, se establecen verdaderos *complejos agro-productivos*, que están en capacidad de transformar la coca producida tanto en las tierras del Pacífico [...]" (Almario 2004: 97)

<sup>27</sup> Según cálculos oficiales, "Hasta 1999 existían 20.000 hectáreas plantadas, de las cuales 126 predios con un total de 2.783 hectáreas corresponden a pequeños agricultores y 10 predios con un total de 14.096 hectáreas, a grandes Palmicultoras, entre ellos Astorca y Palmas de Tumaco. Igualmente la Corporación para el desarrollo agroindustrial Cordeagropaz adelanta en la actualidad un proyecto de siembra de 4.000 hectáreas con pequeños agricultores" (Corponariño 2001: 77-78). Sin embargo, en los últimos años, esta tendencia se ha profundizado con los recursos enmarcados en el Plan Colombia. Así, según una noticia aparecida el viernes 9 de enero de 2004 en la página electrónica del Plan Colombia: "El municipio de Tumaco, Nariño, tiene una connotación especial. A pesar de todas las dificultades que tiene la zona por ser una región con un alto porcentaje en cultivos ilícitos, inestabilidad política y problemas de orden público, los 262 campesinos que creyeron en el proyecto se agruparon en cinco asociaciones para sembrar 1.500 hectáreas. Hoy, y con el apoyo incondicional de Cordeagropaz, han logrado capitalizar el producto y han sabido manejar los dineros invertidos por el Plan Colombia, que llegan a los \$2.717 millones" (Plan Colombia 2004). Para el análisis etnográfico de las transformaciones en las prácticas y relaciones sociales de los pobladores locales acarreadas por el cultivo de la palma africana en la región, véase Restrepo (2004).

modelo de nueva economía) y los otros dos existentes en la región (el modelo extractivo clásico y el modelo alternativo que constituiría el sustrato económico-social del proyecto). Hablando del conflicto, Almario plantea que en

“[...] su dimensión económica se refiere [...] [a] la superposición y competencia de modelos contrastivos y sus respectivos agentes: el modelo extractivo clásico de los agentes externos (nacionales y extranjeros), que se apalancó siempre en el paradigma etnocéntrico; el modelo alternativo de la gente negra, en el pasado de hecho y baja conciencia, en la actualidad en una fase de transición y con la esperanza del control territorial y desarrollo autónomo y el *modelo de nueva economía* que, aunque precede a la situación actual de guerra se ha acelerado con ella y en el que se entremezclan elementos del extractivismo clásico más ‘salvaje’, los ilícitos, delincuenciales y paraestatales con las expectativas del capital transnacional y el contexto global. De estos tres modelos, el de *nueva economía* representa un cambio cualitativo en las condiciones económico sociales de la región, en tanto transformativo, con lo cual se anuncia el total trastocamiento de las relaciones sociales en su conjunto y de las étnicas y culturales en particular” (2004: 96- 97).

Las transformaciones en este sustrato económico-social del proyecto definido por el proceso de comunidades negras han sido tales, que se ha sugerido (Escobar 2004, Villa 2003) que la integración a un proyecto moderno de nación que no se había logrado desde la independencia colonial y en lo que habían fracasado innumerables proyectos de desarrollo diseñados en las últimas tres décadas para la región, se ha consolidado en unos cuantos años mediante la triste combinación de “*plomo, coca, palma y plata*”.

No obstante, con respecto a la erosión del sustrato económico-social deben tenerse en cuenta dos aspectos. De un lado, no es un proceso homogéneo ya que ha impactado de forma diferencial a la región. Esto es, los efectos del ‘modelo nuevo de economía’ en el sustrato económico-social del proyecto no tienen el mismo calado en Llorente, Bocas de Satinga o Tumaco que en Mosquera o en el Parque Natural Sanquianga. De otro lado, este avance del ‘modelo nuevo de economía’ y la consecuente erosión del sustrato económico-social no es absoluto ni ha borrado de un tajo relaciones y racionalidades que han estado presentes en estas poblaciones desde generaciones atrás. Mas bien, las ha subsumido o reorganizado bajo un ensamblaje en el cual se perfila su dominancia, pero no estamos ante un fenómeno de tabula rasa.

Por último, se puede identificar transformaciones demográficas sustantivas en algunas áreas del Pacífico nariñense que modifican las condiciones de posibilidad desde las cuales se venía desplegando el proyecto. El proceso organizativo se adelantaba desde la premisa de una dominante presencia (entre el 90 y 95%) de poblaciones locales negras que se habían acentado desde hacía varias generaciones y que habían consolidado de hecho una apropiación sobre el territorio. Este sustrato demográfico del proyecto ha sido impactado ante la creciente presencia de gentes provenientes de diferentes partes del país, pero especialmente del Putumayo, de Antioquia y del Valle del Cauca.

Estas transformaciones son más palpables en los centros urbanos. En poblados como Tumaco, Llorente, El Charco o Bocas de Satinga los foráneos, principalmente los paisas<sup>28</sup>, han tomado el control del comercio. En Tumaco, por ejemplo, “[...] han montado fachadas de grandes almacenes, han desplazado a los comerciantes nativos, han creado grandes cadenas de almacenes de electrodomésticos, almacenes de ropas y calzado, así mismo como supermercados, se han

L

<sup>28</sup> En el Pacífico sur, ‘paisa’ significa generalmente alguien del interior del país que no es serrano (esto es, del área montañosa de Nariño). Así, a vallunos, antioqueños y bogotanos se los considera paisas.

constituido en red o asociaciones de comerciantes. Se les puede ver en la Calle del Comercio, Calles Marques, la Calle de Transipiales, toda la Avenida de los Estudiantes, los bares y restaurantes de la vía al Morro y El Morro [...]"<sup>29</sup>

### **El conflicto armado y las 'geografías del terror'**

En términos de las poblaciones locales, la escalada del conflicto ha producido lo que el geógrafo Ulrich Olender (2004) ha denominado como 'geografías del terror'. Este concepto ha sido propuesto a partir de la región del Pacífico colombiano, aunque no se considera limitado a la misma. En el análisis del impacto del conflicto armado en el proceso organizativo del Pacífico nariñense este concepto permite examinar las capas más profundas relacionadas con su dimensión espacial. Para Olender, las geografías del terror deben examinarse como la inscripción en los espacios, cuerpos e imaginarios de las poblaciones locales de toda una tecnología del terror. Estas geografías del terror operan e implican a seis interrelacionados registros.

Primero, implican la transformación de ciertos espacios en 'paisajes de miedo', es decir, en paisajes que invisten, significan y preforman miedo a quienes los vivencian ya sea en la visibilidad de estos paisajes a través de las huellas dejadas por los actores del conflicto (los graffitis indicando la presencia de los actores armados o amenazando, las casas destruidas, los cadáveres que bajan por el río, los cuerpos irreconocibles por el ácido en sus rostros y ropas o los 'botaderos' de los muertos como El Tigre en las afueras de Tumaco) o por la escandalosa manifestación mediante espacios vacíos (como las casas y poblados sin habitantes).

Segundo, las geografías del terror implican la restricción de los movimientos regulares (cotidianos o extraordinarios) de las poblaciones y la fragmentación de su espacio mediante la imposición de un régimen de terror. Estas restricciones a la movilidad sobre cuerpos y objetos, que algunos activistas han denominado emplazamiento forzado (Rosero 2004), son explícitas cuando se asocian a las prohibiciones de enunciadas por los actores del conflicto como parte de la disputa sobre el control territorial. Así, por ejemplo, en un documento de solicitud de apoyo ante la situación generada por la escalada de la guerra en Nariño, las organizaciones anotaban: "[...] en el río Mira, área del Consejo Comunitario del Bajo Mira y frontera, zona sur de Tumaco, en las veredas Guabal, Congal, Chontal, Milagro, Cabo Manglares y Bocana Nueva, donde las comunidades están secuestradas por los Paramilitares, que solo les permiten salir por un tiempo no mayor a 24 horas; esta situación afecta aproximadamente 2000 personas" (PCN 2001: 7).

Estas restricciones, sin embargo, también pueden ser implícitas debido al sentimiento de inseguridad del lugar experimentado por los pobladores locales como consecuencia de la presencia de los actores armados. En un artículo sobre una de las activistas fundadoras del Palenque de Nariño, se anota como ante los rumores de la presencia de los paramilitares en la zona el sentimiento de inseguridad se apodera de los pobladores, sobre todo de aquellos que estando ligados al proceso organizativo temían que los asesinaran. Los miedos no fueron infundados, ya que: "Un día cualquiera [...] llegaron [...] con lista en mano hasta su propia casa. Todos lo sabían y los que no, lo intuía, aunque nadie lo dijera expresamente: alguien le estaba pasando una cuenta de cobro por el trabajo resalizado [...]" (Valbuena 2002: 36). Después de esto,

L

<sup>29</sup> Entrevista con líder tumaqueño, 03/12/2004.

ella “Estuvo guardada durante un mes en casas de los amigos, era como estar presa en su propia tierra, así que la angustia, el temor y la desolación minaron su espíritu [...]” (Valbuena 2002: 36).

Tercero, las geografías del terror impactan no sólo las prácticas, relaciones y cuerpos articulados al espacio de los pobladores sino también sus imaginarios, sentimientos y experiencias del espacio haciendo que transforme radicalmente su ‘sentido de lugar’. Este ‘sentido de lugar’ — definido por Oslender (1999) para las poblaciones negras del Pacífico colombiano como ‘espacio acuático’ y referido a lo que Raymond Williams denominaba como ‘estructura de sentimientos’— es constituido por un ensamblaje específico de sentimientos que invisten de un sentido específico a un lugar determinado. Un sentimiento de pérdida, fractura, parálisis, enajenación y violación se imponen cada vez más sobre el sentido de lugar que surge para estas poblaciones en el contexto del conflicto armado. Este sentido de lugar se ve intervenido no solo por las ‘acciones de guerra’, sino también por las ‘acciones tácticas y de movimientos’ que las acompañan, esto es, las acciones

“[...] de tipo persuasivo o disuasivo, como las ‘visitas’ de los actores armados a las poblaciones y asentamientos ribereños o de los frentes de playa para anunciar su ‘presencia’, su ‘vigilancia’ o ‘protección’ sobre la población y efectuar las amenazas y advertencias del caso sobre eventuales auxiliares o colaboradores del bando contrario, con lo cual la vida comunitaria está siendo intervenida y sus decisiones autónomas afectadas con argumentos como la previsión de posibles fortalezas o ventajas del enemigo” (Almarío 2004: 104-105)

Cuarto, los procesos de des-territorialización entendidos no simplemente como la salida forzosa de las tierras y residencias, sino más bien como la imposibilidad del ejercicio territorial ya sea por el abandono temporal o permanente de los pobladores ya sea por la restricción de la movilidad de personas y cosas así como por la incapacidad desde las prácticas de los pobladores locales y de sus formas organizativas de definir una autonomía, apropiación y control sobre su territorio (Oslender 2004: 43). En últimas, estos procesos de des-territorialización producen no sólo gente desterritorializada, sino también territorios sin gente (Almarío 2004: 91). La des-territorialización es uno de los efectos más resaltantes de la irrupción del conflicto armado en el Pacífico nariñense. Según John Antón Sánchez (2003) esta des-territorialización de las poblaciones locales no es una consecuencia no intencional por parte de los agentes del conflicto armado, sino que hace parte integral de su agenda un reordenamiento territorial: “... el impacto del conflicto armado genera pánico individual y colectivo, procesos de desterritorialización, y sobre ellos, repoblamiento de nuevos sujetos sociales... Los actores armados tienen su propuesta de ordenamiento territorial, que no la dan a conocer, pero que es evidente en la medida en que se apropian estratégicamente de ciertas zonas de nuestro territorio” (Antón Sánchez 2003).

Quinto, en un contexto del terror se producen determinados movimientos físicos en el espacio como respuesta de las poblaciones locales. Uno de los aspectos de estos movimientos es el ‘desplazamiento’.<sup>30</sup> En este sentido es crucial comprender las especificidades de estas movilizaciones espaciales en la región del Pacífico nariñense. De otro modo, estos procesos pueden

<sup>30</sup> Como se desprende del análisis desde la noción de ‘geografías del terror’ y como lo han señalado varios autores (Agudelo 2001, Almarío 2004, Escobar 2004, Rosero 2002, Wouters 2001) la noción de ‘desplazamiento’ se hace en el mejor de los casos insuficiente cuando no abiertamente engañadora para comprender lo que sucede en la relación relaciones territoriales de estas poblaciones ante la irrupción del conflicto armado. Desde las organizaciones se resignifica la noción de ‘desplazamiento’ que hace carrera en funcionarios gubernamentales y de algunas ONGs: “El desplazamiento para los grupos étnico es toda imposibilidad individual o colectiva para permanecer, moverse o mantener control sobre sus territorios, producido por el conflicto armado, la violación a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario” (PCN 2001: 7).

pasar desapercibidos o ser erróneamente interpretados. La necesidad de dar cuenta de las especificidades de los movimientos físicos de poblaciones o individuos en el Pacífico nariñense desprendidos del escalamiento del conflicto es indicada por la antropóloga Stella Rodríguez:

“En la costa nariñense los desplazamientos de tipo masivo son escasos, la mayoría de desplazamientos son de carácter individual y familiar. Por otra parte, los desplazamientos forzados se hacen entre veredas y no hacia cascos urbanos, lo cual hace muy difícil su detección y atención, más aun si se tiene en cuenta que los desplazamientos no son definitivos, sino transitorios, de acuerdo al movimiento de los actores armados. Los desplazamientos del 2002, por ejemplo, fueron temporales. En El Charco y La Tola los pueblos quedaron prácticamente deshabitados [...] pero luego la gente retorno de las veredas y de ciudades como Cali, Buenaventura y Guapi” (2003: 1).

Finalmente, en estas geografías del terror se articulan estrategias espaciales de resistencia por parte de los pobladores locales (Oslender 2004: 44) Estas estrategias espaciales de resistencia serían formas concretas de resistencia civil en las cuales se apela al conocimiento y manejo del entorno físico por parte de los pobladores locales para responder y evitar las intervenciones de los actores armados.

### **Consideraciones finales**

Aunque el Pacífico nariñense comparte ciertas características con el resto de la región del Pacífico, también son relevantes sus diferencias sobre todo cuando se analizan los específicos efectos del conflicto armado en el proceso organizativo. En primer lugar, su posición geográfica define una serie de especificidades que han sido definitivas en cómo se ha articulado y desplegado el conflicto en el Pacífico nariñense. Su cercanía con el departamento del Putumayo se ha hecho significativa ya que ante la escalada hacia finales de los noventa de las diferentes disputas entre los actores armados y alrededor de los agentes del narcotráfico (tanto los que lo fomentan como los que lo combaten) en el vecino departamento del Putumayo, el Pacífico nariñense se consolidó como el área más propicia e inmediata para una ola de colonización coquera y de cooptación militar. No cabe la menor duda que el Plan Colombia ha sido un importante catalizante debido a que su foco de intervención militar y de fumigación de los cultivos ha sido el Putumayo, área en la que se concentraban gran parte de los cultivos y de amplio dominio de las FARC.

A pesar de que en esta ola de colonización coquera participaron algunas personas del Pacífico nariñense que habían migrado al Putumayo para aprovechar los beneficios económicos inmediatos que esta bonanza acarrea, el grueso de personas involucradas en esta ola de colonización pertenecían a otras regiones del país, desde los más modestos colonos expulsados por procesos de violencia política o económica hasta los medianos y pequeños ‘empresarios’ en busca de un súbito enriquecimiento. Después de este inicial ciclo de colonización coquera, que tuvo su climax hacia finales de los noventa, por múltiples razones y con grandes contradicciones internas, las poblaciones locales han ido participando cada vez más no solo en las actividades de cultivo y recolección de la hoja, sino también de su procesamiento. Para algunas de estas poblaciones el cultivo y procesamiento del alcaloide no era nuevo, aunque se había mantenido como una actividad marginal y relativamente local. En algunas áreas de la región ya se había iniciado desde finales de los ochenta como en los ríos Satinga y Sanquianga.

Aunque esta inicial colonización coquera estuvo precedida en algunos lugares a la presencia de las guerrillas del ELN y de las FARC, estos movimientos armados y el Bloque Libertadores de

las AUC se consolidan y se expanden con el paulatino incremento de los cultivos de coca y los procesos de su transformación y comercialización. Esta consolidación y expansión no fue el resultado colateral, sino en el que se participó en diferentes planos desde los impuestos sobre la producción hasta la regulación de los mercados, dependiendo de las áreas y de las condiciones y flujos de su influencia sobre la población y dominio militar.

Siguiendo con la específica posición geográfica que ha diferenciado al Pacífico nariñense del resto del Pacífico debe tenerse en cuenta que es frontera con el Ecuador. Aunque todavía esta por desarrollarse un estudio sistemático de los efectos en el Pacífico norte ecuatoriano de la esclada del conflicto armado en el Pacífico nariñense y de sus transformaciones a causa de la creciente relevancia del narcotráfico, se puede argumentar que el Pacífico ecuatoriano pasó a desempeñar el papel ocupado por el Pacífico nariñense hasta hace diez años, esto es, de retaguardia de algunos actores armados, de suministro de logística de guerra y para el procesamiento del alcaloide. Esto hace estratégico el control de una frontera compuesta por esteros, ríos y formaciones boscosas. Una razón de estrategia en las maquinarias de guerra que, dados los términos de la confrontación en el plano nacional, no se pueden dar el lujo de menospreciar. De esta manera se tiene como resultado que el Pacífico nariñense, dado su particular vecindad con el Putumayo y el Ecuador, difiere en que la presencia de los actores armados y las disputas territoriales gravitan más que en ninguna otra área del Pacífico en torno al peso del narcotráfico en su economía y su significado en la logística de las máquinas de guerra.<sup>31</sup>

En segundo lugar, como en ninguna otra área del Pacífico, el monocultivo de la palma africana en los alrededores de Tumaco se perfila como una consolidada y prospera actividad de fuerte inversión.<sup>32</sup> El gobierno nacional ha puesto sus ojos en el significado de la industria palmera y Tumaco tiene la ventaja de ser puerto desde el cual se puede exportar el aceite y otros derivados. Esto hace que los intereses de los empresarios y del estado entren en la ecuación de la escalada del conflicto en la zona, no tanto por la relación directa con los grupos paramilitares (como ha sido reiterativamente denunciado por los activistas), sino porque constituye un área estratégica de política económica. Es significativo que uno de los proyectos productivos bandera del Plan Colombia concebidos como 'desarrollo alternativo' sea el cultivo de palma africana y resulta muy dicente que Tumaco sea uno de los beneficiarios, a través de Cordeagropaz, de estos recursos que alcanzan los \$2.717 millones (Plan Colombia 2004).<sup>33</sup> A pesar de que se están empezando a instrumentalizar cultivos de palma africana en otras áreas del Pacífico, sólo en el Pacífico nariñense esta industria está ya consolidada y tiene el mayor peso entre las actividades

<sup>31</sup> Además, si se da crédito al dato de que gran parte del alcaloide (para no hablar de la heroína producida en pisos térmicos contiguos a las tierras bajas del Pacífico) sale de las costas colombianas vía marítima y si a esto se le agrega la práctica de hacerlo en pequeñas lanchas extra rápidas, esto hace que el Pacífico nariñense con su intrincada filigrana de esteros ofrezca condiciones ideales para adelantar este tipo de operaciones.

<sup>32</sup> Según Fedepalma, para 1999 en el área de Tumaco existían unas 20.996 hectáreas sembradas. Lo que constituía el 47.6 % del total de la superficie en uso del municipio de Tumaco y el 13.3 % del área total sembrada en palma en Colombia. Colombia es el primer productor de palma de aceite en América Latina y el cuarto en el mundo<sup>32</sup>, aportando Tumaco el 11% de la producción nacional de aceite de palma, con un promedio anual de 16 toneladas/ha (Fedepalma, 1999). Esta área debe ser mucho mayor en la actualidad, entre otras razones porque en los últimos años ha habido una fuerte campaña de extensión de los cultivos desde proyectos productivos (1.500 has) financiados con dineros del Plan Colombia.

<sup>33</sup> Para un detalle de los montos oficiales de los recursos destinados hasta el 2003 en el municipio de Tumaco, puede consultarse la siguiente página electrónica del Plan Colombia:

[http://www.plancolombia.gov.co/programas/campo/contenidos/proyectos/proyectos\\_en\\_ejecucion/proyectos\\_ejecucion.html](http://www.plancolombia.gov.co/programas/campo/contenidos/proyectos/proyectos_en_ejecucion/proyectos_ejecucion.html)

economicas legales. De ahí que los intereses empresariales en el Pacífico nariñense no són una hipótesis (algunas veces fantástica) sobre un futuro dorado, sino concretas y bien significativas para las políticas económicas de orden nacional. Por tanto, es una variable a considerar en la especificidad del despliegue del conflicto armado hasta ahora y en los próximos años. A la relevancia en términos de política económica, debe agregarse lo crucial que ha devenido el Pacífico nariñense en términos de la política de “seguridad democrática” y la estrategia de la erradicación de cultivos ilegales mediante la combinación de la fumigación e intervención militar.<sup>34</sup>

En tercer lugar, el proceso organizativo de comunidad negra en el Pacífico nariñense ha tenido una trayectoria diferente del resto de la región del Pacífico. Si bien es cierto, toda la región del Pacífico ha logrado articular en ciertos momentos redes entre las organizaciones de comunidades negras y se han influenciado mutuamente hasta el punto que se puede hablar de un movimiento en toda la región, no por ello se debe dejar de lado las especificidades de Nariño, sobre todo cuando el análisis demanda una escala más detallada para entender sus particularidades.

El peso de la institucionalización del proceso organizativo de comunidades negras (Pardo 2002, Pardo y Alvarez 2001) y las tensiones internas sobre representación han sido mayores que en el Chocó o en el Valle del Cauca, perfilando de hecho una dinámica de reflujo organizativo y de alta vulnerabilidad que antecede a la irrupción del conflicto armado y el boom del narcotráfico. Aunque la irrupción de este conflicto y boom ha servido de catalizador y, en algunos casos, de mediador de dicho reflujo organizativo, no es acertado endosarle el conjunto de problemáticas enfrentadas hoy por el proceso organizativo en la región. Igualmente se puede afirmar con la sustantiva disminución o retirada de los programas, proyectos y entidades que alimentaban financiera y políticamente el proceso organizativo de comunidades negras del Pacífico nariñense. En síntesis, el reflujo organizativo y vulnerabilidad del proceso organizativo en esta región del Pacífico contribuye a dar cuenta de la dificultad de materializar propuestas de resistencia civil como las que han sido desplegadas en el Chocó o en el Valle del Cauca.

Finalmente, los efectos de la irrupción del conflicto armado y el boom del narcotráfico en la región han transformado significativamente los sustratos demográficos, socio-económicos, institucionales y políticos en los cuales se articuló el proceso organizativo de comunidades negras en la década de los noventa. En este sentido, la región ya nunca más será la misma. Aunque las condiciones no son homogéneas (ni siquiera en el Pacífico nariñense), esto parece no ser tan dramático en gran parte del departamento del Chocó, en el Valle del Cauca y en el Cauca. Esto significa que los retos y riesgos que enfrenta el proceso organizativo en el Pacífico nariñense son de mayor envergadura.

L

<sup>34</sup> “El departamento de Nariño, en la frontera sur con Ecuador, es hoy la región del país que muestra significativos retrocesos en dos de las estrategias diseñadas por el Gobierno para combatir el delito: el Plan Colombia y la Seguridad Democrática. En esa región, en donde el plan de fumigaciones se adelanta con una intensidad sin precedentes y se cuenta con una alta presencia de los organismos de seguridad, no sólo los cultivos de uso ilícito han crecido en proporciones geométricas, sino que la violencia generada por los grupos armados ilegales ha resurgido en los últimos meses. El departamento de Nariño, y así lo reconoce el gobernador Eduardo Zúñiga, es la única zona del país en donde el área sembrada con cultivos ilícitos ha aumentado, a pesar de las aspersiones con glifosato. Según el reporte mundial sobre drogas, elaborado por la ONU, en la zona existen 17.628 hectáreas sembradas con coca y amapola. Sin embargo, las autoridades locales consideran que son cerca de 44.000 hectáreas y las propias comunidades estiman que ya van en 50.000. Nariño, especialmente en la llanura del Pacífico, es actualmente la zona de mayor concentración de cultivos ilícitos” (Gamboa 2005: XX)

## Referencias citadas

- Actualidad Etnica. 2003. "Asesinan a otro líder afrocolombiano" N 82. 12 de septiembre.
- Agudelo, Carlos E. 2001. "El Pacífico colombiano: de 'remanso de paz' a escenario estratégico del conflicto armado". En *Cuadernos de Desarrollo Rural*, No. 46, Universidad Javeriana, Bogotá: 5-38.
- Agudelo, Carlos Efrén. 2004. "No todos vienen del río: Construcción de identidades negras urbanas y movilización política en Colombia" En: Eduardo Restrepo y Axel Rojas (eds.), *Conflicto e (in)visibilidad: retos de los estudios de la gente negra en Colombia*. pp. 171-192. Popayán: Editorial Universidad del Cauca.
- Almario, Oscar. 2004. "Dinámica y consecuencias del conflicto armado colombiano en el Pacífico: limpieza étnica y desterritorialización de afrocolombianos e indígenas y 'multiculturalismo' de Estado e indolencia nacional" En: Eduardo Restrepo y Axel Rojas (eds.), *Conflicto e (in)visibilidad: retos de los estudios de la gente negra en Colombia*. pp. 71-118. Popayán: Editorial Universidad del Cauca.
- Arocha, Jaime. 1993. "Chocó: paraíso de paz" En: Astrid Ulloa (ed.), *Contribución africana a la cultura de las américas*. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología-Biopacífico.
- Bravo, Hernando. 2003. "Organizaciones étnico territoriales de los ríos Satinga y Sanquianga: los retos de su lucha por el reconocimiento de la identidad en el litoral Pacífico de Nariño". Tesis de Maestría. Departamento de Antropología. Universidad Nacional de Colombia. Bogotá.
- Castillo, Fabio. 2001. Tumaco, agobiada por la mordaza del miedo. Mayo 27. El Espectador. [http://www.elespectador.com/periodismo\\_inv/2001/mayo/nota1.htm](http://www.elespectador.com/periodismo_inv/2001/mayo/nota1.htm)
- CODHES (Consultoría para los Derechos Humanos y el Desplazamiento). 2003. "Balance del Plan Colombia en la frontera de Colombia con Ecuador: Contraproducidos y Crisis Humanitaria". Bogotá.
- Corponariño. 2001. "Plan de gestión ambiental regional 2002-2012". Pasto. 251 pags
- Diario del Sur. 2005. Está prevista para el 20 de enero Alrededor de mil hombres de las autodefensas entregarán sus armas. Pasto. 14 de enero.
- Diario del Sur. Asesinadas 4 personas. Sigue la violencia en Nariño. 4 de febrero.
- Diario del Sur. 2004. Denuncias en encuentro del litoral. La siembra ilegal de palma perjudica a afrodescendientes. 2 diciembre.
- Diario de Occidente 2004. Caen 50 miembros de las autodefensas ilegales. Lunes, 06 de Diciembre.
- El Tiempo. 2001. Polemica tras consejo de seguridad. Lunes 8 de octubre.
- El Tiempo. 2001. "Tumaco estaba secuestrado". Mayo 24.
- El Tiempo. 2001. 14 guerrilleros muertos en Operación Tsunami. Mayo 20.
- El Tiempo. 2003. Colombia alcanzó nivel récord de desplazamiento forzado. Bogotá. Abril 28.
- El País. 2002. Nariño, expulsor de desplazados. Mayo 13.

- Escobar, Arturo. 2004. "Desplazamientos, desarrollo y modernidad en el Pacífico colombiano"  
En: Eduardo Restrepo y Axel Rojas (eds.), *Conflicto e (in)visibilidad: retos de los estudios de la gente negra en Colombia*. pp. 51-70. Popayán: Editorial Universidad del Cauca.
- Fedepalma. 1999. *Censo nacional de palma de aceite, Colombia 1997-1998*. Bogotá: Fedepalma.
- Gamboa, Oscar. 2005. "Coca y grupos ilegales desestabilizan a Nariño" Diario el País, Cali. Febrero 12.
- Grueso, Libia. 1993-1994. Apuntes y comentarios sobre la 3<sup>ra</sup> Asamblea Nacional de Comunidades Negras. *Esteros*. (3-4): 33-38.
- Grueso, Libia; Carlos Rosero y Arturo Escobar. 1995. El proceso organizativo de comunidades negras en el Pacífico Sur colombiano. *Ecología política* (14): 47-64.
- Jiménez, Germán. 2001. Llorente, nuevo campo de batalla. El Espectador, Jueves 31 de mayo.
- Laclau, Ernesto. 1996. *Emancipation(s)*. Londres: Verso.
- Misión de Observación a la Situación de las Comunidades Afrodescendientes en Colombia. 2002. "Desplazamiento forzado interno, Violaciones al Derecho Internacional Humanitario y Situación de Personas Afrocolombianas en las Carceles". Informe. Junio. Bogotá. [Se puede consultar on line en la siguiente dirección:  
<http://www.nadir.org/nadir/initiativ/agp/free/colombia/txt/2002/afrocolombians.htm#cont>]
- Oslender, Ulrich. 2004. "Geografías de terror y desplazamiento forzado en el Pacífico colombiano: conceptualizando el problema y buscando respuestas". En: Eduardo Restrepo y Axel Rojas (eds.), *Conflicto e (in)visibilidad: retos de los estudios de la gente negra en Colombia*. pp. 33-50. Popayán: Editorial Universidad del Cauca.
- Pardo, Mauricio (ed.). 2001. *Acción colectiva, Estado y etnicidad en el Pacífico colombiano*. Bogotá: ICANH.
- Pardo, Mauricio. 2002 "Iniciativa y cooptación. Tensiones en el movimiento afrocolombiano". En: *150 años de la abolición de la esclavización en Colombia. Desde la marginalidad a la construcción de la nación*. pp. 652-685. Bogotá: Aguilar.
- Pardo, Mauricio y Manuela Álvarez. 2001. Estado y Movimiento Negro en el Pacífico Colombiano. En: Mauricio Pardo, (ed), *Acción Colectiva, Estado y Etnicidad en el Pacífico colombiano*. pp. 229-258. Bogotá: Colciencias-Icanh.
- Plan Colombia. 2004. "La palma de aceite, un proyecto sostenible" viernes 9 de enero. Noticias. [Pagina electronica consultada 14/02/2005  
<http://www.plancolombia.gov.co/programas/campo/index.asp?vinculos=1&noticiaID=514&programa=5>]
- Proceso de Comunidades Negras (PCN). 2001. "Solicitud de apoyo a la urgencia de Nariño" Presentado a ILSA. Documento. Bogotá, noviembre 25.
- Proceso de Comunidades Negras (PCN). S.f. 2001?. "Propuesta integral de emergencia en la Costa Pacífica nariñense para enfrentar la grave crisis humanitaria" documento sin titulo. s.l. Borrador de trabajo. 9 pags.
- Restrepo, Eduardo. 1999. "Aletosos: identidades generacionales en Tumaco". En: Michel Agier *et al. Tumaco: haciendo ciudad*. pp. 151-198. Bogotá: Ican-IRD-Univalle.
- Restrepo, Eduardo. 2004. Un océano verde para extraer aceite: hacia una etnografía del cultivo de la palma africana en Tumaco. *Universitas Humanistica*. 38 (58): 72-81.

- Rodríguez, Stella. 2003. "Desplazamiento forzado" Documento de Trabajo. Julio. Tumaco. 5 págs.
- Rodríguez, Alcira. 2003.
- PCN. 1998? "La costa Pacífica y los derechos humanos".
- Rosero, Carlos y Libia Grueso. 1994. "El Proceso de Comunidades Negras, PCN" Documento para la presentación del PCN a ONG's nacionales e internacionales. Buenaventura. 7 págs.
- Rosero, Carlos. 2002. "Los afrodescendientes y el conflicto armado en Colombia: la insistencia en lo propio como alternativa". En: Claudia Mosquera, Mauricio Pardo y Odile Hoffmann (eds.), *Afrodescendientes en las Américas: trayectorias sociales e identitarias*. pp. 547-560. Bogotá: Universidad Nacional de Colombia-ICANH-IRD-ILAS.
- Sánchez, Jhon Antón. 2003. "El conflicto está generando una contrarrevolución étnica". Entrevista. Semana Lunes, 10 de Marzo.
- Semana. 2001. El nuevo éxodo. noviembre 15.
- Semana. 2003. La narco-guerra. Bogotá. Mayo 6.
- Semana. 2005. Historia de una traición. Edición 1192. Marzo 8.
- Valbuena, Nelly. 2003. "Daira Quiñónez: el orden de la memoria y de la palabra" La Esquina. 35-37.
- Vicepresidencia. 2002. *Panorama actual de Nariño*. Observatorio del Programa Presidencial de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario. Bogotá.
- Villa, William. 2003. "El territorio de comunidades negras, la guerra en el Pacífico y los problemas del desarrollo" En: Mauricio Pardo, Claudia Mosquera y María Clemencia Ramírez (eds.), *Panorámica afrocolombiana. Estudios sociales en el Pacífico*. pp 331-342. Bogotá: ICANH-Universidad Nacional de Colombia.
- Wade, Peter. 1996. "Identidad y etnicidad" En: Arturo Escobar y Álvaro Pedrosa (eds). *Pacífico: ¿Desarrollo o diversidad? Estado, capital y movimientos sociales en el Pacífico colombiano*. pp. 283-299. Bogotá: Cerec.
- Wade, Peter (ed.). 2002. The Colombian Pacific in perspective. *The Journal of Latin American Anthropology*. 7(2).
- Wouters, Mike. 2001. "Derechos étnicos bajo el fuego: el movimiento campesino negro frente a la presión de grupos armados en el Chocó". En: Mauricio Pardo (ed.), *Acción Colectiva, Estado y Etnicidad en el Pacífico Colombiano*. pp. 259-285. Bogotá: ICANH-Colciencias.
- Wouters, Mieke. 2001. Ethnic Rights Under Threat: The Black Peasant Movement Against Armed Groups' Pressure in the Chocó, Colombia. *Bulletin of Latin American Research*. 20 (4): 498-519.